

91ª REUNION — Continuación de la 8ª SESION ORDINARIA DE PRORROGA —
OCTUBRE 30 DE 1964

Presidencia de los señores diputados Arturo Mor Roig, Palmiro B. Bogliano y Miguel P. Del Pero

Secretarios: doctores Eduardo T. Oliver y Guillermo González

Prosecretarios: doctor Enrique A. Pardo y señor Sebastián Oreste Cánepa

DIPUTADOS PRESENTES:

ABALO, Raúl
ACHIARY, Juan C.
AGUIRRE CAMARA, José
ALFONSI, Raúl R.
ALMADA, Jorge Mariano
AMURA, Luis
ANTÓN, Luis
ARANA, Tomás P.
ARIAS, Luis Osvaldo
ARROYO, Ramón F.
AVILA, Eduardo Miguel
BACCAY, Rodolfo D.
BACHINI, José A.
BAFFICO, Alejandro O.
BALBI, Isidro G.
BALESTRA (h.), Juan
BELGRANO RAWSON, Guillermo A.
BELNICOFF, Manuel
BERHONGARAY, Pedro J.
BERRINI, Emilio
BILBAO, Saturnino
BO, Angel
BOBILLO, Luis Ignacio
BOFFI, Luis L.
BOGLIANO, Palmiro B.
BRAVO, Carlos A.
BRAVO, Héctor F.
BUSACCA, Salvador F.
CACERES, Roberto M.
CAGGIANO, Angel E.
CALVO, Carlos Alberto
CARDENAS, Juan Carlos
CARO, José Armando
CARREIRA, Emilio
CASAS, David Jorge
CASTELLAR, Miguel A.
CATALAN, Guillermo
CENTENO, José Isaac
COGGIOLA, Luis S.
COLELLO, Clemente Juan
CONDOLUCI, Domingo A.
CONTINI, Juan Carlos
CORAL, Juan Carlos
CORNEJO LINARES, Juan Carlos
CORTELEZZI, Osvaldo
CHEBLE, Francisco R.
CHRISTE, Jorge J.
DAMIANI, Salvador
DE CARA, José Eduardo
DEL PERO, Miguel P.

DI LEO, Amadeo
DOMINGORENA, Horacio O.
ELENA, Reinaldo
FABRIZIO, Luis N.
FERNANDEZ, José M.
FERNANDEZ, Raúl
FERNANDEZ MENDY, Julio O.
FERNANDEZ NÚÑEZ, Isidro
FERRARI, Luis
FERREIRA, Jorge W.
FIGUEROA, Jaime Hernán
FIOL, Juan Antonio
FISCHER, Mauricio
FRAGA, Jorge Horacio
FREGA, José
GALEANO, Roberto A.
GARAY, Fermín J.
GARCIA, Horacio
GARCIA LEYENDA, F. Rodolfo
GARIBALDI, Alberto
GAROFALO, Roberto A.
GHIOLO, Américo
GODOY, Ruperto Honorio
GOMEZ MACHADO, Héctor
GONZALEZ BERGEZ, Pablo
GRAU, Mario A.
GUALCO, Jorge Nelson
GUTIERREZ, Eduardo O.
HARRINGTON, Luis J. D.
HERRERA, Oscar A.
IGLESIAS, Israel
JOFFA, Emilio
LEJARRAGA, Pablo
LEÓN, Luis Agustín
LESCANO, Edmundo A.
LOZANO, Martín
LUCO, Juan A.
LLAVER, Santiago Felipe
MAGGI, José M.
MAGLIETTI, Alberto R.
MALDONADO, Carlos A.
MANSILLA, José R.
MARSICO, Adalberto O.
MARTINEZ RAYMONDA, Rafael J.
MASSOLO, Eduardo A.
MENDEZ DOYLE, Abel Víctor
MERCADO, José Ignacio
MIGANNE, Carlos J.
MINSK, Hugo E.
MOLINAS, Ricardo F.
MONTE, Ricardo Álvaro
MOR ROIG, Arturo

MOSSET ITURRASPE, Mario
MUNIAGURRIA, Camilo
MUNIZ, Ramón A.
MURATORI, Eduardo D.
MURMIS, Oscar
MUSACCHIO, Vicente M.
MUSITANI, Héctor Francisco
OCAMPO, Carlos E.
OREJA, Pablo Fermín
ORTIZ HERNANDEZ, Angel E.
PATLIS, León
PEDRINI, Ferdinando
PENA, Roberto M.
PEREIRA, Antonio
PEREZ, Raúl
PEREZ GALLART, Alcides B.
PERINASETTI, Horacio
PICADO, Estanislao
PIZARRO, Teodosio F.
POSSE, Melchor S.
RASINES, Osvaldo Gregorio
RENÉ, José María
REQUENA, Raúl María
RIAL, Oscar
RITACCO, Araldo A.
ROBERTO, Mario
RODRIGUEZ, Rogelio Ramón
RODRIGUEZ DEL REBOLLAR, José
RODRIGUEZ VAGARIA, Eduardo
ROIS, Roberto
ROSITO, M. Oscar
ROUZAUT, Adolfo R.
ROZAS, José E.
RUIZ, Amalio David
RUIZ, José Oscar
SAGO, Fayiz
SALADO, Francisco A.
SARRULLE, Oscar E.
SCARFELLO, Cayetano
SCHAPIRA, David
SCHAPOSNIK, Eduardo C.
SERVIGARCIA, Alberto
SOLARI, Eduardo A.
SOLARI, Juan Antonio
TABULLI, Pascual
TORREIRO, Raúl
TORRIGLIA, Enrique F.
TORTONESE, Dante Oscar
TROCCOLI, Antonio A.
VACA LOBO, Juan Manuel
VACCAREZZA, Eduardo H.
VALENTE de PEREZ TORT, Lidia

VAZQUEZ POL, José
VEDIA, Enrique de
VENTEMIGLIA, Rogelio A.
VILLANUEVA, Julio A.
VIÑALS, Fernando J.
ZANONI, Juan Claudio
ZARRIELLO, Raúl Jorge

AUSENTES, CON LICENCIA:

ARRASCAETA, Félix de
AVETA, Francisco O.
BALBOA, Hernán A.

CANTONI, Angel Serafin
COSTANTINO, Adolfo I.
CUERDO, Ramón
DOMINGUEZ, Luis C.
MARTINEZ, Ramón S.
NOUGUÉS, Isaias J.
PENA Y LILLO, Silvestre
SCALITER, Juan

AUSENTE, CON AVISO:

BERINI, Carlos J.
LILJESTHRÖM, Eduardo R.

PALACIOS, Alfredo L.
PESSINO, Felipe
SOLANA, Jorge D.
TACHELLA, Eliberto S. J.

AUSENTE, SIN AVISO:

CALABRESE, Pablo
DÍAZ, Diógenes C.
DÍAZ O'KELLY, Felipe F.
LLORENS, Héctor
ROMEU VERDIER, Gabriel
SANDLER, Héctor R.

SUMARIO

- 1.—Continuación de la sesión. (Pág. 5551.)
- 2.—Caja Federal de Ahorro y Préstamo para la Vivienda. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Vivienda, de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre creación de dicha caja. (Orden del día 259.) Queda pendiente. (Pág. 5551.)
- 3.—Plan de labor propuesto por el señor diputado Jofré en nombre de la Comisión de Labor Parlamentaria. Se aprueba. (Pág. 5599.)
- 4.—Cuestión de privilegio planteado por el señor diputado Garófalo. Pasa a comisión. (Pág. 5601.)
- 5.—Autorización para desempeño de cargos de cónsules honorarios. Consideración y aprobación del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Orden del día 307.) (Pág. 5601.)
- 6.—Ferrocarril General Belgrano. Consideración y aprobación del dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley del señor diputado Boffi sobre designación con el nombre de Vicealmirante E. Montes a la actual parada 26 de dicho ferrocarril. (Orden del día 322.) (Página 5602.)
- 7.—Derogación del decreto 7.758/63. Consideración y aprobación del dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley del señor diputado Boffi sobre derogación del decreto mencionado, relacionado con la reincorporación del ex comisario Cipriano Lombilla a la Policía Federal. (Orden del día 324.) (Pág. 5604.)
- 8.—Donación, reintegro y transferencia de inmuebles. Consideración y aprobación de varios dictámenes de la Comisión de Legislación General. (Orden del día 326.) (Pág. 5605.)
- 9.—Monumento nacional. (Ejemplar de olivo existente en Arauco, La Rioja.) Consideración y aprobación del dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley del señor diputado Arrascaeta. (Orden del día 328.) (Página 5609.)
- 10.—Mausoleo a Sarmiento. Modificación del artículo 2º de la ley 16.006. Consideración y aprobación del dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión. (Orden del día 329.) (Pág. 5610.)

- 11.—Locales de escuelas en varias localidades de la provincia de Misiones. Consideración y aprobación del dictamen de las comisiones de Obras Públicas y de Educación en el proyecto de ley del señor diputado Nougues. (Orden del día 332.) (Pág. 5611.)
- 12.—Certificado prenupcial. Consideración y aprobación del dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Legislación General en el proyecto de ley del señor diputado Bo. (Orden del día 333.) (Pág. 5613.)
- 13.—Cesión, donación y transferencia de terrenos. Consideración y aprobación de varios dictámenes de la Comisión de Legislación General. (Orden del día 337.) (Pág. 5615.)
- 14.—Viviendas familiares. Consideración y aprobación de los dictámenes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Vivienda y de Previsión y Seguridad Social en el proyecto de ley del señor diputado Zariello y otros. (Orden del día 342.) (Pág. 5618.)
- 15.—Universidad Nacional de Tucumán: transferencia de inmueble a su favor. Consideración y aprobación del dictamen de las comisiones de Legislación General y de Educación en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo. (Orden del día 344.) (Pág. 5624.)
- 16.—Pensiones. Consideración y aprobación del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. (Orden del día 345.) (Pág. 5625.)
- 17.—Pensiones. Consideración y aprobación del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. (Orden del día 277.) (Pág. 5653.)
- 18.—Moción del señor diputado Serú García para que la Honorable Cámara se aparte del reglamento y constituida en comisión vote un aumento de pensión a la viuda de Raúl Scalabrini Ortiz. Se rechaza. (Pág. 5672.)
- 19.—Trabajadores rurales: seguro de vida obligatorio. Consideración y aprobación del dictamen de la Comisión de Previsión y Seguridad Social en el proyecto de ley del señor diputado Belnicoff. (Orden del día 349.) (Pág. 5672.)
- 20.—Consejo Nacional de Protección del Anciano. Consideración y aprobación del dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública, de Previsión y Seguridad Social, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en el pro-

- 59.—**Moción del señor diputado Alfonsín** de aplazar la consideración del orden del día 411. Se aprueba. (Pág. 5763.)
- 60.—**Clínica de Enfermedades Cardiovasculares.** Derogación del decreto 2.175/63, por el que se transfiere a la Academia Nacional de Medicina. Consideración y aprobación del dictamen de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública y de Legislación General en el proyecto de ley en revisión. Orden del día 412.) (Pág. 5.763.)
- 61.—**Personal docente de establecimientos educativos oficializados.** Consideración y aprobación del dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de ley del señor diputado Rouzaut y otros. (Orden del día 411.) (Pág. 5.765.)
- 62.—**Colonia de vacaciones Santa Rita:** transferencia. Consideración y aprobación del dictamen de las comisiones de Legislación General y de Educación en el proyecto de ley en revisión. (Orden del día 413.) (Pág. 5.766.)
- 63.—**Transferencia de inmueble** a la provincia de Río Negro. Consideración y aprobación del dictamen de las comisiones de Legislación General, de Industria y de Transportes en el proyecto de ley en revisión. (Orden del día 414.) (Pág. 5767.)
- 64.—**Moción del señor diputado Balestra** para que se trate sobre tablas la modificación del Honorable Senado al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión sobre construcción y habilitación del edificio para el Colegio Nacional de Curuzú Cuatíá. Queda pendiente. (Pág. 5770.)
- 65.—**Legislación represiva.** Consideración y aceptación de las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión. (Pág. 5770.)
- 66.—**Moción del señor diputado Balestra** registrada en el número 64 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 5788.)
- 67.—**Colegio Nacional Manuel Belgrano** de Curuzú Cuatíá, Corrientes. Consideración de las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión. Se aceptan. (Pág. 5788.)
- 68.—**Donación** de una fracción de terreno al Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown. Consideración y aprobación del dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión. (Orden del día 415.) (Página 5788.)
- 69.—**Constitución Nacional:** exhibición de originales en el Salón de Pasos Perdidos de la Honorable Cámara. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento que aconseja la aprobación de las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de resolución que le fuera pasado en revisión. (Orden del día 339.) Se aprueba. (Pág. 5790.)
- 70.—**Reincorporación de personal ferroviario.** Consideración del dictamen de las comisiones de

Legislación del Trabajo y de Transportes. (Orden del día 347.) Vuelve a comisión. (Pág. 5790.)

- 71.—**Moción del señor diputado Caggiano** para que se considere sobre tablas el orden del día 401. Es retirada. (Pág. 5795.)
- 72.—**Moción del señor diputado Arias** para considerar sobre tablas el orden del día 409. Se aprueba. (Pág. 5795.)
- 73.—**Transferencia de inmueble** a la Municipalidad de Cinco Saltos, Río Negro. Consideración y aprobación del dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley en revisión. (Orden del día 409.) (Pág. 5795.)
- 74.—**Pensiones.** Consideración y aprobación del dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento en el proyecto de ley en revisión sobre el otorgamiento y aumento de varias pensiones. Se aprueba el dictamen I: pensión a doña Rosa Saibene de Sabattini. (Orden del día 416.) (Pág. 5796.)

75.—**Apéndice:**

I.—**Sanciones de la Honorable Cámara.** (Página 5802.)

II.—**Inserciones.** (Pág. 5824.)

III.—**Planilla de asistencia a las sesiones de la Honorable Cámara.** (Pág. 5826.)

IV.—**Planilla de asistencia a las comisiones.** (Página 5829.)

—En Buenos Aires, a los treinta días del mes de octubre de 1964, a la hora 10 y 50:

1

CONTINUACION DE LA SESION

Sr. Presidente (Mor Roig).—Continúa la sesión.

De acuerdo con lo oportunamente resuelto por el cuerpo, corresponde tratar el dictamen contenido en el orden del día 259.

2

**CAJA FEDERAL DE AHORRO Y PRESTAMO
PARA LA VIVIENDA**

(Orden del día número 259)

Dictamen de comisiones

Honorable Cámara:

Las comisiones de Vivienda, de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda han considerado el mensaje 4.449 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre creación de la Caja Federal de Ahorro y Préstamo para la Vivienda; y, por las razones expuestas en el informe escrito reglamentario que se acompaña y las que darán los señores

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 2º.

— Resulta afirmativa de 90 votos; votan 111 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 3º.

— Resulta afirmativa de 90 votos; votan 111 señores diputados.

— El artículo 4º es de forma.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Queda sancionado el proyecto de ley (1).

64

MOCION

Sr. Presidente (Mor Roig). — Dentro del plan de labor de la Honorable Cámara resta considerar el orden del día 415 que obra en la mesa de la Presidencia, pero no ha sido impreso.

Sr. Arias. — Hay un despacho sobre un proyecto, en revisión del Senado, orden del día 409, que no se ha considerado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — No estaba incluido en el orden del día, señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado Balestra.

Sr. Balestra. — Para reiterar el pedido de tratamiento inmediato del proyecto sobre construcción y habilitación del edificio para el Colegio Nacional de Curuzú Cuatiá, que ha sido devuelto por el Honorable Senado con una pequeña modificación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En este momento acaba de tener entrada dicho proyecto.

Sr. Sarrulle. — Recuerdo a los señores diputados que son las 23 y de acuerdo con el plan de labor debe comenzar a tratarse el tema de la legislación represiva.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Así es, señor diputado. Pero la Presidencia sólo quiere señalar que falta considerar únicamente dos o tres órdenes del día más.

Sr. Sarrulle. — Que se traten a continuación de la legislación represiva.

Sr. Vázquez Pol. — Podrían tratarse antes los despachos que restan.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Lo resuelto por la Honorable Cámara es que a las 23 comience el tratamiento de la derogación de la legislación represiva. Como no hay unanimidad para considerar primero los otros órdenes del día, la Presidencia entiende que debe cumplirse lo oportunamente resuelto.

65

LEGISLACION REPRESIVA
(Sancionado con modificaciones)

Buenos Aires, 29 de octubre de 1964.

Al señor presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en reunión de la fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión sobre derogación de normas penales, y ha tenido a bien aprobarlo en la siguiente forma

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Deróganse los decretos leyes y decretos 4.072/56, 4.161/56, 22.490/56, 7.165/62, 8.161/62, 1.296/63, 2.713/63, 1.607/63, 788/63, 3.134/63, 4.200/63, 4.215/63, 4.778/63, 5.175/63, 5.540/63, 5.541/63, 4.214/63.

Art. 2º — Recobran su vigencia las disposiciones legales derogadas, sustituidas o modificadas por los decretos leyes 788/63; 4.778/63 menos los artículos 8º, 9º, 11; incisos a), b) y c) del artículo 12; 15 y 17, segunda parte, de la ley 13.985.

Art. 3º — Incorpórase al Código Penal, como capítulo V del título VIII (delitos contra el orden público), y bajo el epígrafe de «otros atentados contra el orden público», el siguiente artículo:

Artículo 213 bis. — Serán reprimidos con prisión de un mes a tres años:

- 1º Los que participaren en agrupaciones permanentes o eventuales que, sin estar comprendidas en el artículo 210, tuvieren por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas, por la fuerza o el temor por el solo hecho de ser miembro de la agrupación.
- 2º Los que participaren en organizaciones, o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación religiosa o racial en cualquier forma.
- 3º Los que incitaren a la violencia, por la sola incitación, o realizaren actos de violencia sea individualmente o integrando organizaciones, contra cualquier raza o grupo de personas de otra religión, origen étnico o color.
- 4º Los que públicamente instigaren a los militares o a los componentes de la fuerza de seguridad a desobedecer las leyes o violar los deberes de la dis-

(1) Véase el texto de la sanción en el Apéndice.

ciplina militar, de manera tal que los hechos u omisiones de los instigados sean idóneos para comprometer el orden público.

Art. 4º — Agrégase como última parte del artículo 218 del Código Penal, lo siguiente:

Se aplicarán así mismo a los extranjeros residentes en territorio argentino, salvo lo establecido por los tratados o por el derecho de gente, acerca de los funcionarios diplomáticos y de los nacionales de los países en conflicto.

En este caso se aplicará la pena disminuida conforme a lo dispuesto por el artículo 44.

Art. 5º — Agrégase como segunda parte del artículo 222 del Código Penal, (título IX, capítulo II del libro segundo), el siguiente:

Artículo 222. — Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que públicamente ultrajare la bandera, el escudo o el himno de la Nación o los emblemas de una provincia argentina.

Art. 6º — Reemplázase el artículo 157 del Código Penal por el siguiente:

Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por uno a cuatro años el funcionario público que revelare hechos, actuaciones o documentos que por la ley deben quedar secretos.

Reemplázase en el artículo 73 inciso 3º: «salvo en los casos del artículo 154» por: «salvo en los casos de los artículos 154 y 157».

Art. 7º — Incorpórase al Código Penal, como párrafo segundo del artículo 261, el siguiente:

Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.

Art. 8º — Reemplázanse los artículos 256, 258 y 259 del Código Penal, por los siguientes:

Artículo 256. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años o reclusión de dos a seis años e inhabilitación absoluta por tres a diez años el funcionario público que por sí o por persona interpuesta recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones, o para hacer valer la influencia derivada de su cargo ante otro funcionario público, a fin de que éste haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones.

Artículo 258. — Será reprimido con prisión de seis meses a seis años el que, directa o indirectamente, diere u ofreciere

dádivas a un funcionario público, en procura de la conducta reprimida por el artículo 256. Si la dádiva se hiciera u ofreciere a un juez, la pena será de reclusión o prisión de dos a seis años. Si el culpable fuere funcionario público, sufrirá además inhabilitación especial de dos a seis años en el primer caso y de tres a diez años en el segundo.

Artículo 259. — Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación absoluta de uno a seis años el funcionario público que admitiere dádivas, que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo.

El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año.

Art. 9º — Incorpóranse al Código Penal, como capítulo IX bis del título XI («Delitos contra la administración pública»), bajo el epígrafe: «Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados», los artículos siguientes:

Artículo 268¹. — Será reprimido con la pena del artículo 256 el funcionario público que, con fines de lucro, utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo.

Artículo 268². — Será seprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta de tres a diez años el que, al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, posterior a la asunción de un cargo o empleo público. La prueba que ofrezca de su enriquecimiento se conservará secreta a su pedido, y no podrá ser invocada contra él para ningún otro efecto.

La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con prisión de uno a cuatro años.

Art. 10. — Sustitúyese el artículo 302 del Código Penal por el siguiente:

Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, siempre que no concurren las circunstancias del artículo 172:

1º El que dé en pago o entregue por cualquier concepto, a un tercero un cheque sin tener provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto, y no lo abonare en moneda nacional dentro de las veinticuatro horas de habersele comunica-

do la falta de pago mediante aviso bancario, comunicación del tenedor o cualquier otra forma documentada de interpelación.

- 2º El que dé en pago o entregue, por cualquier concepto a un tercero un cheque, a sabiendas de que al tiempo de su presentación no podrá legalmente ser pagado.
- 3º El que librase un cheque y diera contraorden para el pago, fuera de los casos en que la ley autoriza a hacerlo, o frustrarse maliciosamente su pago.
- 4º El que librase un cheque en formulario ajeno sin autorización.

Art. 11. — Agrégase al artículo 67 del Código Penal, como segundo párrafo, el siguiente:

La prescripción también se suspende en los casos de delitos previstos en los capítulos 6, 7, 8, 9 y 10, del título XI, libro II del Código Penal mientras cualquiera de los que hayan participado se encuentren desempeñando un cargo público.

Art. 12. — Sustitúyense las siguientes penas establecidas por el Código Penal:

La del artículo 226, por prisión de dos a diez años.

La del artículo 229, por prisión de uno a seis años.

La del artículo 230, por prisión de uno a cuatro años.

La del artículo 265, por reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta de tres a diez años.

La del artículo 266, por prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de uno a cinco años.

La del artículo 267, por las de prisión hasta cuatro años y de inhabilitación hasta seis años.

Art. 13. — Sustitúyense las palabras «rebelión en el caso del artículo 226 del Código Penal, sedición en el caso del artículo 229 del Código Penal, asociación ilícita o cualquiera de los comprendidos en el decreto ley 788/63», del artículo 377 del Código de Procedimientos en lo Criminal para la Justicia Federal y los tribunales de la Capital y los territorios nacionales, reformados por el artículo 24 del decreto ley 2.021/63, por las siguientes:

O cualquiera de los comprendidos en el libro II, título VIII, capítulos 2, 3 y 5, título IX, título X, título XI, capítulo 6, 7 menos los casos de los artículos 260, 262 y 264, capítulos 8, 9 y 9 bis del Código Penal, o en la ley 13.985.

Art. 14. — En los procesos o penas que reconozcan su origen en el régimen de la ley

15.293 se aplicará la disposición contenida en el artículo 29 del Código Penal.

Art. 15. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.

CARLOS H. PERETTE
Claudio Maffei

Dictámenes en minoría

I

Las comisiones de Legislación Penal y Asuntos Constitucionales, en minoría, han estudiado conjuntamente las reformas introducidas en su sanción por el Honorable Senado, en el proyecto relativo a derogación de normas penales, que le fuera pasado en revisión; y, por las razones expuestas en el informe escrito, se aconseja mantener la sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Sala de la comisión, 30 de octubre de 1964.

Fayiz Sago. — Vicente M. Musacchio.
— Juan C. Achiary.

INFORME

La derogación de los decretos represivos, lo sosteníamos en el anterior informe, debe ser un acto autónomo, de acuerdo a lo expresado constantemente por todas las agrupaciones políticas.

No corresponde la sustitución de los decretos, porque el actual orden jurídico es suficiente para defender la seguridad del Estado y el orden público, según las opiniones de los más destacados penalistas citados a través del debate efectuado anteriormente.

Además, el informe de la mayoría auspicia reformas al Código Penal, que no titubeo en calificarlas de enormidad jurídica, por lo imposible que resultará determinar cuando se comete un delito, es decir, por carencia absoluta de la tipicidad.

En definitiva, so pretexto de derogar decretos invalidados por un régimen constitucional, se aprovecha para crear un sistema verdaderamente peligroso y represivo.

Por ello, insistimos en la anterior sanción de la Honorable Cámara de Diputados.

Fayiz Sago.

II

Honorable Cámara:

Vuestras comisiones de Legislación Penal y de Asuntos Constitucionales han tomado en consideración las reformas introducidas en su primitiva sanción por el Honorable Senado en el proyecto de ley y mensaje número 2.801 sobre derogación de normas penales que le fuera pa-

sado en revisión; y, por las razones que se dan en el informe escrito, os aconsejan, en minoría, el archivo de todas las actuaciones.

Sala de las comisiones, octubre 30 de 1964.

Jorge J. Christe.

INFORME

Es indispensable que la sanción de ciertas leyes que hacen a la salud de la República devengan luego del estudio meditado y profundo de los legisladores.

En su oportunidad, el tratamiento y sanción del proyecto que hoy nos ocupa mereció la atención por meses de las comisiones y de vuestra honorabilidad.

El Senado introduce modificaciones, algunas de consideración, y pretender dictaminar con responsabilidad en cuestión de horas o minutos no está a mi alcance.

No es desdeñable también la circunstancia de que han variado, en cierta medida, las condiciones políticas en el país desde la sanción primitiva a la fecha.

Nuestra posición se debe, fundamentalmente, a la necesidad de contar con un lapso mínimo exigido por nuestro concepto de la responsabilidad y la conciencia de nuestras limitaciones.

Estamos dispuestos a dar opinión definitiva en las sesiones extraordinarias, que se sabe convocará el Poder Ejecutivo, para otros asuntos, y que no dudamos incluiría el que hoy nos preocupa en el supuesto de que no obtuviera en la fecha sanción.

La premura nos obliga a dictaminar en la forma que lo hacemos, cuando hubiéramos querido tener el tiempo necesario para la meditación y poder adoptar una posición con respecto a las enmiendas, acorde a nuestra ideología democrática, a nuestra fe en la República, a nuestro respeto por las instituciones y a nuestro amor a la patria.

Jorge J. Christe.

ANTECEDENTES

Mensaje 2.801 del Poder Ejecutivo

Visto el pedido formulado precedentemente por la Comisión de Legislación Penal y teniendo en cuenta la conveniencia de asegurar la mayor difusión posible del mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional (derogación de normas penales), especialmente entre instituciones universitarias y centros de estudios especializados,

El presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

1º — Disponer la impresión de mil (1.000) ejemplares de un folleto conteniendo el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional (derogación de normas penales).

2º — Por la Secretaría Administrativa se adoptarán las medidas pertinentes a los fines del cumplimiento de esta resolución.

3º — Comuníquese.

Sala de la Presidencia, 30 de abril de 1964.

*ARTURO MOR ROIG.
Guillermo González.*

Buenos Aires, 21 de abril de 1964.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a vuestra honorabilidad el adjunto proyecto de ley por el cual, conforme a lo anunciado oportunamente, se solicita la derogación de normas penales que son contrarias a los principios constitucionales, y la sanción de otras que configuran la máxima urgencia en materia de legislación penal de fondo.

1

El proyecto contempla la derogación de todas las normas de ese tipo que no hayan sido establecidas por ley del Honorable Congreso, porque sólo mediante una ley sancionada de acuerdo con los artículos 18, 67, inciso 11), y 68 a 73 de la Constitución Nacional, pueden establecerse preceptos que, determinando delitos y penas, restrinjan la libertad individual. Al reafirmar el principio de que no hay delito ni pena sin ley previa, el Poder Ejecutivo responde a una muy clara inspiración democrática y a su decisión de asegurar la efectiva vigencia de la Constitución en todos sus ámbitos.

Por eso entiende cumplir, con este acto que editará para lo futuro la posibilidad de interpretaciones contradictorias en la aplicación de las normas penales, una nueva e importante etapa del afianzamiento de nuestras instituciones republicanas. Dentro de ese criterio, el Poder Ejecutivo estima impostergable la ratificación del status jurídico penal establecido por ley. Pero esto debe hacerse evitando el restablecimiento de algunas disposiciones contenidas en la ley 13.985.

Quiere también, especialmente, que todos los preceptos que castigan la mera opinión sean derogados, porque no son compatibles con el régimen republicano de nuestra Constitución, que asegura la libertad de pensamiento. Propicia, pues, la derogación de los decretos leyes 4.161/56, 2.713/63, 4.214/63 y 5.540/63 y sus ratificatorios porque, sin ser leyes, establecieron normas de carácter penal e instituyeron sanciones para la sola expresión de las ideas.

2

Al mismo tiempo, considera de toda urgencia el establecimiento de nuevas normas que protejan el orden y la paz en la sociedad, afiancen la autenticidad en la formación del gobierno representativo y aseguren la fidelidad y la honestidad de los agentes de la administración.

Para ello, propone un refuerzo del título de los delitos contra el orden público del Código Penal de la Nación para reprimir cierto tipo de conductas que en numerosas ocasiones han perturbado la tranquilidad pública.

El proyecto prevé la incorporación de un nuevo artículo (213 bis) al Código Penal, en el que se castiga a los que participaren en agrupaciones permanentes o eventuales que, sin alcanzar la categoría de asociaciones delictivas del tipo del artículo 210,

tienen por finalidad el ejercicio de violencias contra las personas o las cosas. El artículo 210 reduce el ámbito de la banda o asociación ilícita a los objetivos típicamente delictuales. Sin embargo, también son perturbadoras de la tranquilidad pública las agrupaciones permanentes o que actúan en forma eventual y que tienen por finalidad el despliegue de violencias contra las personas o las cosas que no llegan a estructurar delitos definidos por la legislación penal en los términos exigidos por el artículo 210, y que deben ser castigadas no por sus acciones concretas sino por su objetivo violento. El nuevo artículo 213 bis, inciso primero, comprende como actividad punible antes de los actos de ejecución delictiva, la participación en agrupaciones permanentes o eventuales con objetivos de violencia, incluso si esas violencias no llegaran a tipificar delitos particulares. Por supuesto que la forma que hace residir la criminalidad en el hecho en sí de la participación en la agrupación, señala ya que si la actuación del grupo lo lleva a la ejecución de un delito, éste concurre materialmente con el hecho que reprime la nueva norma.

En el inciso segundo del artículo 213 bis se propugna el castigo de los que públicamente instigaren a la discriminación o lucha racial, religiosa o de clases, con lo que se tiende a evitar las graves discordias sociales que involucra la instigación en forma pública a menospreciar una raza determinada o a los adeptos de una religión o a los componentes de un sector social o a que determinados grupos étnicos, religiosos o sociales, se hagan la guerra entre sí. Una regla que indique al pueblo que la ley penal considera como delito la instigación a semejante conducta, ha de servir sin duda para tranquilizar los espíritus y refrenar ese tipo de actos.

El inciso tercero lleva al área del derecho penal el castigo de los que pública o privadamente instigaren a los miembros de los cuerpos armados a desobedecer las leyes o los deberes de la disciplina militar u otros deberes inherentes a su estado. Las fuerzas militares y de seguridad son sagradas en sí mismas cuando se mueven dentro de sus fines propios; por eso, la actividad de los que se ponen en contacto con ellas para sacarlas de sus reales y legítimos objetivos y levantarlas contra las leyes o los deberes dentro de cuyo marco se mueve su acción legítima, debe ser castigada porque perturba en alto grado la paz social.

El proyecto de José Peco y el del Poder Ejecutivo de 1960, contemplan la situación del extranjero que no debe obediencia a la Nación por razón de su empleo o función pública, pero que reside en el país, y que toma las armas contra la Nación o coopera con sus enemigos o incurre en otros ataques a la soberanía nacional. El hecho de la residencia crea para el extranjero un vínculo especial con el país. Los derechos y garantías que la ley les reconoce en igualdad, implican la obligación correlativa de respetar la integridad de la Nación que generosamente los acoge. Por eso, mediante un agregado al artículo 218 del Código Penal, se extienden al extranjero residente las penas de los artículos 214 a 218, dejándose a salvo, desde luego, la situación de los nacionales de los países en conflicto y de los funcionarios diplomáticos.

Se proyecta también, como artículo 222 del Código Penal, una norma que castiga el ultraje a los símbolos patrios (proyecto Peco, artículo 312). Se ha considerado más apropiada la fórmula «ultrajare», que la de «menospreciare» contenida en dicho pro-

yecto. Esta norma protegerá los valores de la nacionalidad en su representación simbólica. Desde luego que si el hecho constituye un delito más grave por su forma o lugar de comisión, se aplicarán las reglas del concurso de delitos.

Los acontecimientos que con alguna frecuencia han perturbado la estabilidad de las instituciones constitucionales, han determinado que el proyecto propicie el aumento de las penas establecidas para la sedición y la rebelión en los artículos 226, 229 y 230 del Código Penal.

Se han tenido en cuenta, para ello, las penas contempladas en los artículos 288, 291 y 292 del proyecto de 1960.

El proyecto propone también la represión, dentro del Código Penal, de los delitos contra la voluntad popular en la elección de los representantes del pueblo, para asegurar la protección e intangibilidad de nuestro sistema representativo. Hasta ahora, el resguardo de la expresión de la voluntad popular en las elecciones nacionales, provinciales o municipales, ha estado entregado a las propias leyes particulares sobre la materia, produciéndose la incongruencia de que hechos que tienen las características de delitos de derecho penal común, se convierten en contravenciones particulares a una ley especial. El resguardo de la expresión auténtica de la voluntad popular en la elección de los representantes del pueblo es un interés de los gobernados como miembros de la sociedad nacional y no como miembros alternativamente, de esa sociedad o de la sociedad provincial o municipal. Todos los individuos tienen interés en que la forma representativa republicana de gobierno no se altere en ninguna de las esferas jurisdiccionales que establece el federalismo. Para no confundir la verdadera categoría de la delincuencia cuyo castigo se propicia, es preciso tener en cuenta que los delitos comprendidos en este ámbito son distintos por su esencia jurídica de las infracciones particulares, a las leyes particulares de elecciones, que no tienden a proteger la voluntad popular en sí, sino la aplicación y el mecanismo de esas leyes.

El proyecto contempla en este punto la protección del acto eleccionario en sí, de la voluntad del elector, de la rectitud de su conducta, la incolumidad del secreto del voto y de los documentos electorales y del escrutinio. Las exposiciones de motivos de los proyectos de José Peco y del Poder Ejecutivo de 1960, y las notas de éste, ilustran acerca del origen de cada disposición y sobre su alcance.

Propone, además, amplias y detalladas normas que contemplan el castigo del enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos y la revelación de hechos, actuaciones y documentos que deben quedar secretos, así como un aumento de las penalidades fijadas para los delitos de cohecho, de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y de exacciones ilegales. Su criterio fundamental es que la seguridad del Estado no asienta tanto en la irrazonable represión de los gobernados, como en la severa custodia de los titulares del ejercicio de la función pública.

Propone, por fin, una reforma sustancial al artículo 302 del Código Penal, para asegurar la confianza en el cheque, instrumento imprescindible de la circulación comercial, que había sido alterado por el abuso de una práctica reprochable. La norma propuesta tiende a lograr una mayor eficacia en la represión del delito, aumentando la pena y los casos sancionables previstos en aquel artículo y en el artículo 19 del decreto ley 4.778/63. Se incorpora, por

una parte, la pena de inhabilitación, que será un medio eficaz para disminuir la reiteración de este tipo de delincuencia. Se limita, por otra parte, únicamente a la situación prevista por el inciso primero, la posibilidad de abonar el importe del cheque después de la comunicación de la falta de pago; ésta puede realizarse por simple aviso bancario o del tenedor, o mediante cualquier otra forma documentada de interpelación, de manera que sólo se requiere la existencia de una noticia comprobable remitida al librador, que lo ponga razonablemente en condiciones de enterarse, pero sin necesidad de que sea personalmente informado, lo que en casos de fuga o ausencia puede resultar imposible.

Los restantes incisos, entre los que se incorpora el caso de frustración maliciosa del pago del cheque que antes no había sido previsto, constituyen conductas que por su específica criminalidad quedan excluidas de la opción que se otorga por el inciso primero.

La derogación del decreto ley 788/63 impone, por otra parte, la adecuación del artículo 377 del Código de Procedimientos en lo Criminal para la justicia federal y los tribunales de la capital y los territorios nacionales, reformado por el artículo 24 del decreto ley 2.021/63. El proyecto prevé, por ello, su modificación, y determina limitaciones a la excarcelación para algunos delitos que afectan el orden público y la seguridad de la Nación, y la incolumidad y decencia de la función pública.

3

El Poder Ejecutivo piensa que las nuevas normas deben incorporarse como modificaciones o ampliaciones al Código Penal de la Nación, y dentro de su estructura orgánica. Es necesario restaurar la unificación de la legislación penal de fondo, evitando la dispersión asistemática y sobre todo el establecimiento de «leyes especiales» para casos no previstos como tales por la Constitución, tras las cuales, en no pocas ocasiones, se han ocultado instrumentos de dominación y avasallamiento al federalismo por el desconocimiento de las competencias locales.

Para elaborar este proyecto, el gobierno no ha querido obrar apresuradamente, sino que ha consultado a los especialistas, requiriendo la opinión de distinguidos profesores de derecho penal sobre el «examen y vigencia de la legislación represiva», y pidiéndoles «proposiciones para su reforma y el establecimiento de un régimen penal adecuado a los principios de la Constitución Nacional», según el texto de las notas oportunamente cursadas por el Ministerio del Interior.

Esas consultas, las experiencias recogidas en los proyectos de José Peco y del Poder Ejecutivo de 1960, y especialmente la contestación del profesor Ricardo C. Núñez, cuyo dictamen se acompaña, han ilustrado al Poder Ejecutivo para la elaboración de este proyecto, que responde a una definida orientación: apartarse de la tendencia de la legislación represiva dictada de un tiempo a esta parte a título de protección penal del Estado, iniciando el restablecimiento de un auténtico derecho penal democrático, basado exclusivamente en la ley.

El Poder Ejecutivo anuncia desde ya su propósito de ocuparse con posterioridad de la reforma integral del Código Penal, propiciando su actualización. Pero esta tarea requiere calma, estudio y tiempo, y debe realizarse a la luz de las necesidades demostradas por la práctica, interpretadas mediante la labor judicial, los estudios de los especialistas y los hechos de la vida social, cuyo examen requiere amplitud en

los tres sentidos indicados. Supone la consideración, por otra parte, de las necesidades de los organismos administrativos tendientes a practicarla, lo que constituye también una especial preocupación de este gobierno.

Pero considera que no se puede demorar, mientras tanto, el examen por parte de vuestra honorabilidad del status jurídico penal actual en el ámbito de lo urgente para adecuarlo a los principios democráticos de nuestra Constitución, refirmando la jerarquía de la ley como única fuente del derecho penal, eliminando el delito de opinión y sancionando las normas que la sociedad necesita como protección contra la violencia y el fraude.

Por las razones expuestas, se solicita la aprobación del adjunto proyecto de ley, en la seguridad de que vuestra honorabilidad lo considerará favorablemente, como un medio eficaz para afianzar la vigencia de la Constitución, el orden en la sociedad y la paz y concordia entre los argentinos.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

ARTURO U. ILLIA

Carlos R. S. Alconada Aramburú. — Juan S. Palmero.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Deróganse los decretos leyes 4.161/56, 2.713/63, 4.214/63, 5.540/63, los decretos leyes que los ratifican, los decretos leyes Nº 788 del 30 de enero de 1963 y Nº 4.778 del 12 de junio de 1963.

Art. 2º — Deróganse los artículos 137, 138, 139, 140, 141, 142 y 143 del decreto ley 4.034/57 (Régimen Electoral Nacional, texto ordenado), y los artículos 157 y 259 del Código Penal (ley 11.179).

Art. 3º — Decláranse vigentes las disposiciones legales derogadas, sustituidas o modificadas por los decretos leyes 788/63 y 4.778/63, menos los artículos 222, 223, 224 y 259 del Código Penal (ley 11.179), y los artículos 8, 9, 11, 12, letras a, b y e, 15 y 17 segunda parte de la ley 13.985.

Art. 4º — Incorpórase al Código Penal, como capítulo V del título de los «Delitos contra el orden público», y bajo el epígrafe de «Otros atentados contra el orden público», el siguiente artículo:

Artículo 213 bis. — Serán reprimidos con prisión de uno a cinco años:

1º Los que participaren en agrupaciones permanentes o eventuales que, sin estar comprendidas en el artículo 210, tuvieren por finalidad el ejercicio de violencias contra las personas o las cosas, por el solo hecho de su participación.

2º Los que públicamente instigaren a la discriminación o lucha racial, religiosa o de clases.

3º Los que pública o privadamente, instigaren a los militares o a los componentes de las fuerzas de seguridad a desobedecer las leyes o violar los deberes de la disciplina militar u otros deberes inherentes a su estado.

Art. 5º — Agrégase como última parte del artículo 218 del Código Penal, lo siguiente:

Se aplicarán también a los extranjeros residentes en territorio argentino, salvo lo establecido por los tratados o por el derecho de gentes acerca de los funcionarios diplomáticos y de los nacionales de los países en conflicto.

Art. 6º.—Incorpórase como artículo 222 del Código Penal (título IX, capítulo 2, del libro segundo), el siguiente:

Artículo 222.—Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que públicamente ultrajare la bandera, el escudo o el himno de la Nación.

Art. 7º.—Sustitúyense las siguientes penas establecidas por el Código Penal:

La del artículo 226 por prisión de dos a diez años.

La del artículo 229 por prisión de uno a seis años.

La del artículo 230 por prisión de uno a cuatro años.

Art. 8º.—Incorpórase al Código Penal, como título X bis del libro segundo, bajo el epígrafe de «Delitos contra la voluntad popular», los artículos siguientes:

Artículo 236¹.—El que con violencias, intimidación o amenazas turbare gravemente o impidiere la votación o el escrutinio de una elección nacional, provincial o municipal, será reprimido con prisión de uno a seis años.

Artículo 236².—El que mediante violencia, intimidación o amenazas a un elector le impidiere votar o le obligare a hacerlo de una manera determinada, será reprimido con prisión de uno a cuatro años.

Artículo 236³.—Se impondrá prisión de uno a cuatro años al que mediante dádivas o engaños tratase de inducir a un elector a no votar o a votar de una manera determinada.

Artículo 236⁴.—Se impondrá prisión de uno a cuatro años al que suplantare a otro votante, votare más de una vez en la misma elección o votare sin tener derecho a hacerlo.

Artículo 236⁵.—El que por medios ilícitos intentare descubrir la forma en que un elector ha votado, será reprimido con prisión de seis meses a tres años.

El elector que diere publicidad a su voto en el acto de votar, será reprimido con prisión de quince días a seis meses.

Artículo 236⁶.—Se impondrá prisión de dos a ocho años:

1º Al que en la formación de un registro electoral insertare o hiciere insertar o suprimiere o hiciere suprimir nombres indebidamente.

2º Al que de cualquier otro modo falsificare o destruyere, en todo o en parte, un registro electoral, libretas cívicas o actas de escrutinio u ocultare, retuviere o hiciere desaparecer esos documentos de manera que el hecho pueda dificultar la elección o falsear su resultado.

3º Al que sustrajere, destruyere o sustituyere urnas utilizadas en una elección, antes de practicarse el escrutinio.

4º Al que sustrajere, destruyere o sustituyere boletas de sufragio desde el momento en que éstas fueron depositadas por los electores hasta la terminación del escrutinio.

5º Al que de cualquier modo falseare el resultado de una elección o tornare imposible el escrutinio.

Artículo 2367.—La condena por uno de los delitos previstos en este título a una pena privativa de la libertad no superior a tres años, lleva como inherente la pena de inhabilitación para el ejercicio de los derechos políticos activos y pasivos por el término de cinco años; si la pena privativa de la libertad fuere mayor, la inhabilitación será de diez años.

Art. 9º.—Incorpóranse al Código Penal, como capítulo IX bis del título «Delitos contra la administración pública», bajo el epígrafe «Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados», los artículos siguientes:

Artículo 268¹.—Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta por tres a diez años, el funcionario o empleado público que, por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para hacer valer la influencia derivada de su cargo ante otro funcionario o empleado público, a fin de que éste haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones.

El que diere la dádiva o hiciere la promesa y la persona interpuesta para hacerla o recibirla, serán reprimidos con prisión de uno a tres años.

Artículo 268².—Será reprimido con la pena del artículo 268¹, párrafo 1º, el funcionario o empleado público que, con fines de lucro, utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo.

Artículo 268³.—Será reprimido con prisión de seis meses a dos años e inhabilitación absoluta por uno a seis años, el funcionario o empleado público que admitiere dádivas que le fueren presentadas u ofrecidas en consideración a su oficio.

El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año.

Artículo 268⁴.—Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta por tres a diez años, el que al ser debidamente requerido no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial suyo o de persona interpuesta para disimularlo, posterior a la asunción de un cargo o empleo público.

La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con prisión de uno a cuatro años.

Art. 10.—Incorpórase al Código Penal, como párrafo segundo del artículo 261, el siguiente:

Será reprimido con la misma pena el funcionario o empleado público que empleare en provecho propio o de tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.

Art. 11.—Incorpórase al Código Penal el artículo siguiente:

Artículo 253 bis.—Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por uno a cuatro años, el funcionario o empleado público que revelare hechos, actuaciones o documentos que por la ley deben quedar secretos.

Art. 12. — Sustitúyense las siguientes penas establecidas en el Código Penal:

La del artículo 256, por reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta por tres a diez años;

La del artículo 257, párrafo 1º, primera parte, por prisión de uno a cuatro años, y reclusión o prisión de dos a seis años la de la segunda parte. La del párrafo segundo del mismo artículo, por la de inhabilitación especial por dos a seis años en el primer caso y por tres a diez años en el segundo;

La del artículo 265, por reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta por tres a diez años;

La del artículo 266, por prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de uno a cinco años;

La del artículo 267, por las de prisión hasta cuatro años y de inhabilitación hasta seis años.

Art. 13. — Sustitúyese el artículo 302 del Código Penal, por el siguiente:

Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años, siempre que no concurren las circunstancias del artículo 172:

1º El que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero un cheque sin tener provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto, y no lo abonare en moneda nacional de curso legal dentro de las veinticuatro horas de habersele comunicado la falta de pago mediante aviso bancario, comunicación del tenedor o cualquier otra forma documentada de interpelación.

2º El que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero un cheque, a sabiendas de que al tiempo de su presentación no podrá legalmente ser pagado.

3º El que librare un cheque y diera contraorden para el pago fuera de los casos en que la ley autoriza a hacerlo, o frustrare maliciosamente su pago.

4º El que librare un cheque en formulario ajeno sin autorización.

Art. 14. — Sustitúyense las palabras «rebelión en el caso del artículo 226 del Código Penal, sedición en el caso del artículo 229 del Código Penal, asociación ilícita o cualquiera de los comprendidos en el decreto ley 788/63», del artículo 377 del Código de Procedimientos en lo Criminal para la Justicia Federal y los Tribunales de la Capital y los Territorios Nacionales, reformado por el artículo 24 del decreto ley 2.021/63, por las siguientes:

«o cualquiera de los comprendidos en el Libro Segundo, título VIII, capítulos 2, 3 y 5, título IX, título X, título XI capítulos 6, 7 menos los casos de los artículos 262 y 264, 8, 9 y 9 bis del Código Penal, o en la ley 13.985».

Art. 15. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Carlos R. S. Alconada Aramburú. — Juan S. Palmero.

DICTAMEN DEL PROFESOR DOCTOR RICARDO C. NÚÑEZ

Director del Instituto de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Córdoba a la consulta formulada por el Ministerio del Interior sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Córdoba, diciembre de 1963.

A su excelencia el señor ministro del Interior, doctor Juan S. Palmero.

S/D.

I

OBJETO DE LA CONSULTA

El señor ministro, por nota de fecha 31 de octubre próximo pasado, ha tenido a bien requerir mi colaboración y opinión, como director del Instituto de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Córdoba, sobre los puntos siguientes, a saber:

Examen y vigencia actual de la legislación represiva.

Proposiciones para su reforma y establecimiento de un régimen penal adecuado a los principios de la Constitución Nacional.

La respuesta exige capítulos separados.

II

VALIDEZ CONSTITUCIONAL ACTUAL DE LOS DECRETOS LEYES REPRESIVOS

La cuestión no debe plantearse respecto de si los decretos leyes represivos dictados por el gobierno defacto, tienen o no vigencia en el período de jure en que nos encontramos. No cabe duda que la situación defacto hizo necesaria, para evitar el caos, la administración del Poder Ejecutivo provisional. Este gobierno dictó durante su administración decretos y decretos leyes, y, al dictarlos, observó las formalidades jurídicas exigibles al Poder Ejecutivo. Esto basta para decir que, por lo menos como decretos o reglamentos ejecutivos, esas normas están válidamente incorporadas al status jurídico de la Nación.

Esa no es, sin embargo, la cuestión decisiva actual. Esta, tratándose de normas represivas, plantea el problema en otro punto: la constitucionalidad actual, en el período de jure, de las normas represivas dictadas por el Poder Ejecutivo defacto.

No es discutible que hoy, pasado el período defacto, la Constitución de la Nación rige en su plenitud, sin excepciones fundadas en razones de necesidad derivadas de ese período.

El status constitucional actual no tiene por qué hacerle concesiones a la situación defacto para privar a los habitantes, a partir del 12 de octubre próximo pasado, de lo que para ellos representa una garantía constitucional.

Los artículos 18, 19 y 67, inciso 11, de la Constitución, que le entregan la represión a la ley, cualquiera sea su índole y medida, no admiten, por consiguiente, limitaciones en su aplicación actual. La ley es una regla de derecho investida con la más alta autoridad pública, la del legislador, o Poder Legislativo. Ningún otro mandato o disposición de otro poder, u órgano del Estado, puede hacer una ley. El Congreso dicta leyes,

el Ejecutivo decretos, el Judicial sentencias» (1). Por lo tanto, aquellos artículos exigen que para castigar a una persona la infracción y la pena estén contenidas en una ley formada y sancionada con arreglo a los artículos 68 a 73 de la Constitución, y excluyen que cualquiera otra norma jurídica represente una fuente de represión constitucionalmente válida.

Una de las consecuencias del principio *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*, establecido por los artículos 18 y 19 de la Constitución, es la prohibición del castigo por analogía (2). La prohibición de la analogía funciona tanto para excluir que un hecho no previsto por una ley represiva se castigue con la pena correspondiente a un hecho previsto por esta ley por ser semejante (*analogía legis*), como para impedir que un hecho no previsto como punible por una ley en el sentido constitucional, se castigue por estar reprimido por otra norma a la que, por cualquier razón jurídica, se la asimila a la verdadera ley penal (*analogía juris*) (3). También aquí la pena se funda en una equiparación de situaciones, cuya consecuencia es multiplicar el elenco de delitos y penas más allá de lo que permite su única fuente constitucional: la ley formada y sancionada por el Congreso. Esto último es lo que, precisamente, sucede con la asimilación de los decretos leyes represivos a la ley penal del Congreso.

III

ESTABLECIMIENTO DE UN REGIMEN PENAL ADECUADO A LOS PRINCIPIOS DE LA CONSTITUCION

Este objetivo exige dos actitudes fundamentales. Por un lado, la restauración de la unificación del derecho penal común en el Código Penal; por otro lado, el abandono del delito de opinión.

1

UNIFICACION DEL DERECHO PENAL COMUN

En orden al derecho penal común, dentro del que caen los delitos contra la seguridad del Estado, contra el orden y la seguridad pública, etcétera, el Código Penal y las leyes que lo complementan son la única fuente legal de imposición de penas (C. Nac., artículo 67, inciso 11) (4).

La legislación penal especial sólo procede en el ámbito del resguardo de las leyes especiales (o federales) que el Congreso sanciona sobre materias particulares de gobierno, cuya regulación le confieren distintos incisos del artículo 67 de la Constitución. Por ejemplo, la protección penal de las leyes impositivas, económicas, de navegación, de correos, electorales, etcétera, y la regulación represiva disciplinaria militar.

La tendencia a regular la delincuencia común por leyes especiales ha obedecido, en gran parte, a la idea de extender la jurisdicción represiva de los tribunales federales sobre materias que no les corresponden por el carácter de ellas, los lugares o las personas (C. Nac., art. 67, inc. 11). La mala costumbre ha persistido a pesar de que, con motivo de la ley de defensa social número 7.029, de 1910, la Corte Suprema de la Nación

declaró inconstitucional esa indebida extensión de la jurisdicción federal (1).

Para evitar confusiones al respecto y poner fin a esa tendencia, es necesario restaurar en su plenitud el principio de la unidad de la legislación represiva común que instauró el Código Penal vigente y a cuyo favor reaccionó ya el proyecto de 1891.

2

EXCLUSION DEL DELITO DE OPINION

A

El delito de opinión no es compatible con el régimen representativo republicano

Si hemos de practicar con lealtad la república representativa, es preciso que dejemos de realizarla de un modo, sustancialmente falso, que la daña en su esencia.

La licitud de todas las opiniones es algo inherente al sistema de gobierno popular. Este exige que, aunque en forma indirecta, el pueblo decida sobre las cuestiones y objetivos que constituyen un programa de gobierno. Para esto son indefectibles la libre información sobre teorías o doctrinas políticas, económicas, etcétera, y la libre expresión del pensamiento de los individuos sobre ellas. Es un deber de los gobernantes posibilitar este desiderátum respetando y fomentando la incolumidad de los derechos de enseñar y aprender, garantías indispensables para que el pueblo decida consciente y razonablemente sobre las cuestiones y objetivos del gobierno.

El sentido de la dirección gubernamental sobre el asunto se corrompe de modo muy perjudicial para la República cuando el gobierno abandona la actitud de respeto y fomento del acceso del pueblo a las fuentes de información y la sustituye por una actitud policial de selección y prohibición de las ideas y doctrinas. La experiencia de los argentinos ha sido muy dura al respecto. Durante diecisiete años del siglo pasado y doce años muy recientes, la tiranía usó y abusó de la vigilancia de las ideas, y el solo hecho de comulgar con ciertos pensamientos o enseñanzas fue, si no siempre delito tipificado y reprimido, el más odioso y eficaz medio de selección política y social. Pero lo que me interesa subrayar es que ese instrumento de gobierno no curó vicios, sino que engendró muchos, tan graves como la sustitución de la conciencia ciudadana por un servilismo oportunista, y no preservó contra los males que se decía combatir. La dirección coercitiva penal de la opinión del país puede disimular las ideas contrarias al pensamiento oficial, puede impedir su exteriorización y detener la acción, que inspiran, pero no puede aniquilarlas o corregirlas. La historia es maestra en este punto.

B

Formas de reprimir las opiniones

No es necesario salir del ámbito de nuestros precedentes para tener una idea clara sobre las formas utilizadas por los gobiernos para castigar las opiniones. Lo han hecho de un modo directo o de un modo indirecto.

a) Modo directo

Las opiniones se castigan directamente cuando se reprime la exteriorización o difusión de las ideas pro-

(1) J. V. GONZÁLEZ, *Manual de la Constitución Argentina* (6ª edición), núm. 490. Se entiende que limita la consideración al ámbito de la legislación nacional.

(2) Corte Suprema de la Nación, «Fallos», t. 137, p. 425; t. 150, p. 293; t. 184, p. 116; R. C. NÚÑEZ, *Derecho Penal Argentino*, t. I, p. 110.

(3) Ver R. C. NÚÑEZ, ob. cit., p. 111.

(4) *Exposición de motivos del Proyecto de 1891* (1ª ed.), 6; Corte Suprema de la Nación, «Fallos», t. 102, p. 112; t. 176, p. 315.

(5) Véase Corte Suprema de la Nación, «Fallos», t. 113, p. 263; t. 117, p. 146; t. 120, p. 134; «Jurisprudencia Argentina», t. 1, p. 1. También la *Exposición de Motivos del Proyecto de 1891* (1ª ed.), p. 6; *Edición Oficial del Código Penal*, p. 113.

pías sobre determinados asuntos o la exposición de doctrinas políticas, filosóficas, económicas o religiosas. Es lo que hacen la ley 13.569, artículo 3º (6), y los decretos leyes 788/63 (artículos 5º y 18); 4.214/63 (artículos 3º y 8º) y 2.713/63 (artículo 1º).

b) Modo indirecto

Las normas represivas vigentes acusan un modo indirecto de estructurar y castigar el delito de opinión. Ya no declaran delictuoso expresar, enseñar o difundir una idea o doctrina, sino la adhesión a partidos, ideas o doctrinas, o el uso de materialidades significativas de esa adhesión. Los artículos 1º y 3º del decreto ley 4.161/56, vigente en virtud de su ratificación por decreto 7.165/62, y el decreto ley 1.296/62, prevén y castigan un tipo de delito de opinión de esta especie.

c

La exclusión del delito de opinión no deja en libertad de acción a los extremistas

El hecho de que la profesión o difusión de las opiniones o la adhesión a ellas no deba determinar la criminalidad del agente no trae como necesaria consecuencia la libre acción de los partidarios de ideas políticas, económicas, religiosas o filosóficas extremas. La acción extrema de infiltración fraudulenta o de violencia subversiva, no es conveniente para el pueblo. Ataca, al desordenarla mediante la violencia o falsearla mediante el fraude, la práctica regular de la República.

La acción violenta o fraudulenta de los extremistas, cualquiera sea su carátula, no puede ser amparada o tolerada por el falso slogan de que restringiéndola o controlándola se atacan libertades constitucionales. Cualquiera sea el móvil de la violencia o del fraude, sus expresiones no están amparadas por la Constitución, y es un deber ineludible del Estado oponerse a ellos. Esta oposición no cabe sólo en los tramos delictivos, mediante la represión de su manifestación a través de acciones calificadas por la ley como delitos. Cabe, también, en los tramos de su preparación y organización, mediante la acción preventivo-policial del Estado que resguarda la licitud de las asociaciones o reuniones y el orden público, así como la incolumidad de la estructura subjetiva de la administración pública.

D

Los compromisos internacionales no obligan a instituir el delito de opinión

Los compromisos internacionales no inducen a la Nación a combatir los extremistas totalitarios recurriendo al delito de opinión. Las declaraciones de solidaridad para la preservación de la integridad política de los Estados americanos propugnan la lucha contra la actividad subversiva, violenta o fraudulenta, del comunismo internacional o de cualquier totalitarismo, preferentemente con medidas de policía preventiva (Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, 1948; Décima Conferencia Interamericana, Caracas, 1954; Segunda Reunión de Consulta entre Ministros de Relaciones Exteriores, La Habana, 1940, y Tercera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, Río de Janeiro, 1942).

(6) Reproducción del proyecto del Poder Ejecutivo del 8 de enero de 1941 (ver EUSEBIO GÓMEZ, *Tratado de derecho penal*, t. V, p. 284, núm. 1244).

IV

DECRETOS LEYES MODIFICATORIOS DEL CODIGO PENAL

Con la derogación de la ley 13.569 (artículo 3º) y de los decretos leyes que instauran el delito de opinión, no habrá concluido el problema que el Poder Ejecutivo y el Congreso deben abordar frente al status jurídico-penal presente. Para adecuar razonablemente ese status a la Constitución el Congreso debe derogar, ratificar o modificar el contenido de los decretos leyes 788/63 y 4.778/63 que han reformado de manera muy amplia el Código Penal.

V

DECRETO LEY 788/63

Este decreto ley fue dictado el 30 de enero de 1963. Contiene una extensa reforma de los títulos del Código Penal sobre seguridad de la Nación y contra la seguridad y orden públicos, en la medida que los cenáculos del Poder Ejecutivo defacto creyeron necesaria para dotar a la Nación de instrumentos legales adecuados para hacer frente, según se dice en los fundamentos del decreto ley, a la acción subversiva «desarrollada por los enemigos de la democracia y del mundo libre», en contra de su seguridad exterior y de su paz interior.

La necesidad de una reforma de la naturaleza y extensión de la realizada por el decreto ley 788, se comienza a poner en duda a raíz de la reforma aconsejada por los comisionados de diciembre de 1963 respecto de los delitos contra la seguridad, la salud y el orden públicos, la cual, en cuanto a la sistematización de las materias y a la introducción de nuevos delitos, está muy lejos de los extremos de aquel decreto ley. Pienso, además, por un lado, que debe rechazarse la amplitud que el decreto ley 788 le da al delito de sabotaje; y por otro lado, que la seguridad de la Nación, el orden público y los poderes públicos, así como el orden constitucional, encuentran una razonable protección represiva dentro del sistema del Código Penal adecuadamente actualizado.

1

LA EXCESIVA AMPLITUD DEL DELITO DE SABOTAJE

El decreto ley 788/63, artículo 12, reprime como sabotaje algunos hechos cuya naturaleza criminal los coloca en otros títulos delictivos. La actitud del legislador no tiene el significado de un simple error jurídico. Se trata de una postura a designio: se trata de asignarle mayor gravedad a los delitos y, sobre todo, de justificar, en razón del interés atacado, la jurisdicción federal para conocer y juzgar de ellos. Empero, como lo he dicho, el legislador, así sea el Congreso, no puede ampliar la jurisdicción federal determinada por la Constitución, so pretexto de que la seguridad de la Nación está afectada por un delito que, en realidad, no la ofende (7).

El proyecto Peco no prevé el delito de sabotaje, y el proyecto de 1960 —prescindiendo de las exageraciones propias de los países totalitarios o que se encuentran en distintas circunstancias políticas y militares que el nuestro— lo reduce, justamente, a los casos de violación de contratos de interés militar (artículo 286) y de daño en objetos de interés militar (artículo 287) estando la Nación en guerra.

(7) Ver las citas de la nota núm. 5.

El artículo 12 del decreto ley 788 sigue la línea del sabotaje estructurada durante la tiranía por el decreto 536/45 (artículo 32), ley 13.985 (artículos 7 a 12) y el proyecto de Código Penal de 1951 (artículos 431 a 439). Estos estatutos prescinden, salvo para agravar el sabotaje, del presupuesto de que la Nación se encuentre en guerra, que es, precisamente, la circunstancia que determina que una serie de hechos previstos por ellos y por el decreto ley 788 resulten directa e inmediatamente lesivos de la seguridad interior del país. Lo que, con arreglo al artículo 12 de este decreto ley, transforma en sabotaje, en tiempo de paz, hechos cuya naturaleza los coloca entre los delitos contra la propiedad, la administración pública, la seguridad pública o la economía pública, es la finalidad de «impedir o perturbar la seguridad o defensa nacional». Pero este elemento subjetivo no es algo esencial para autorizar la defensa penal de los bienes materiales, de los servicios o actividades a que se refiere el artículo 12 y que, realmente, merecen el amparo de la ley penal. O esos objetos no necesitan de la represión penal, o encuentran protección conveniente y científicamente exacta en otros títulos delictivos.

La protección que discierne el inciso 1º del artículo 12, objetable ya por vaga en su materialidad, es susceptible en tiempo de paz por leyes protectoras de los elementos respectivos y de su radicación en el país.

El atentado contra los servicios públicos o de utilidad pública (inciso 2º) debe considerarse, dentro del sistema del Código Penal, en un capítulo del título de los delitos contra la seguridad pública o común (8). El objeto que ataca el delito es algo que concierne a esta seguridad y es lesionable sin necesidad de que concurra el dolo del que el artículo 12 hace depender la delictuosidad.

El hecho de suscitar alarma colectiva, tumulto o desorden (inciso 3º) corresponde que se estructure como delito contra el orden, tranquilidad o paz públicos. Así lo hacen el Código Penal artículo 211), los proyectos de Peco (artículo 284) y de 1960 (artículo 270), la ley 15.276 (artículo 1º) y el propio decreto ley 788 (artículo 37). La alarma colectiva, el tumulto o el desorden, incluso como resultado logrado, no atacan de manera segura, a pesar del designio del agente, la seguridad interior de la Nación. Estos efectos, cualquiera que sea el designio del autor, alteran el orden material de la comunidad. Contra ellos resultan adecuadas las penas para los hechos que tienden a lograrlos. Su logro podrá agravar la pena, pero no transformar la naturaleza de la delincuencia.

Los daños a los elementos inherentes a la producción (inciso 4º) y el perjuicio a la economía rural o forestal (inciso 7º) no tienen por qué salir de los límites del daño contra la propiedad (proyecto de 1960, artículo 226, inciso 2º), o del incendio (Código Penal, artículo 186, inciso 2º; proyecto de 1960, artículo 241, letra a), o de la explosión (proyecto de 1960, artículo 242, letra a), o si se quiere seguir el proyecto Peco (artículos 258 y 259), del delito contra la economía pública, por sus efectos sobre la riqueza o el consumo nacionales. En este mismo título debiera considerarse la posibilidad de incriminar los atentados a la producción que prevén los incisos 5º y 6º.

Si la Nación está en paz, no resulta necesaria la represión penal, y menos con prisión de 2 a 15 años,

(8) Proyecto de 1960, artículo 251. También el proyecto Peco, artículo 225, aunque con distinta nomenclatura.

de la omisión de abastecimientos o servicios destinados a la seguridad o defensa nacionales (inciso 8º). Para asegurarlos bastan las regulaciones civiles y administrativas, con las sanciones pertinentes. El hecho es punible como sabotaje si la Nación se encuentra en guerra (proyecto 1960, artículo 286). Entonces sí se ofende la seguridad de la Nación, porque se afecta su acción bélica.

2

LA SEGURIDAD DE LA NACION NO EXIGE LA RATIFICACION DE LOS DISTINTOS TITULOS DEL DECRETO LEY 788/63

El decreto ley 788 debe derogarse. Su ratificación no es exigida por razones de urgencia. Esto se comprende fácilmente cuando se examinan los títulos de los delitos contra la seguridad y el orden públicos, contra la seguridad de la Nación y contra los poderes públicos y el orden constitucional vigentes al dictarse el decreto ley 788, en virtud del Código Penal y de las leyes 13.945 (sobre tenencia y tráfico de armas y explosivos), 13.985 (sobre espionaje y sabotaje) y 15.276 (sobre represión del terrorismo).

Todo este sistema represivo, derogado por el decreto ley 788 (artículo 51) —que está constitucionalmente en vigencia, porque una ley sólo se deroga por otra ley—, es sin duda perfectible, pero una labor amplia y provechosa al respecto requiere tiempo y estudio. Una actitud prudente exige que, por ahora, para evitar las malas consecuencias de posibles interpretaciones contrarias sobre su actual vigencia, el Congreso ratifique ese sistema, con las derogaciones y actualizaciones indispensables.

VI

DEROGACIONES INDISPENSABLES

El catálogo de delitos y penas de la ley 13.985 no es totalmente compatible con un derecho penal democrático y científico. En este aspecto debe ser revisado de inmediato, sin perjuicio de que en la tarea de actualización de la legislación represiva, en su integridad, se abandone todo su sistema.

Los artículos 8º, 9º, 11, 12, letras a, b y e, 15 y 17, 2ª parte, deben derogarse sin tardanza.

El artículo 8º reprime el llamado sabotaje psicológico. El precepto, calificado como un nuevo instrumento de opresión del peronismo (9), constituyó un poderoso medio de contralor de las opiniones y acciones individuales. Como defensor me tocó intervenir en casos de esta especie. En realidad, el artículo 8º incursiona en una materia cuya delictuosidad corresponde examinar en el título de los delitos contra el orden público. Pero esta delictuosidad sólo puede declararse, a título de intimidación pública, con ciertos resguardos relativos a los medios utilizados para producir la alarma pública, y de los cuales prescinde el artículo 8º (10).

La regla del artículo 9º es una norma muy propia del autoritarismo o de la tiranía. Ella pretende sustituir la posible impotencia de la autoridad por la delación individual. Pretende que todo el que, por cualquier motivo, entre en «contacto» con un espía o saboteador, lo delate. La regla no requiere que el delator conozca que el sujeto ha cometido o que está por cometer un hecho de espionaje o sabotaje.

(9) Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, t. III, 1951, p. 2310.

(10) Ver R. C. Núñez, Instituto de Derecho Penal, Boletín V, 1959, p. 181 y sigs. Véase, también, el informe (p. 6096) y la discusión (ps. 6106 y sigs.) de la ley 15.276, en el Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados citado.

El artículo 11, inútil en tiempo de paz, introduce la pena de muerte y resuelve así un problema sólo examinable, con libertad y tiempo, por el Congreso. La derogación del artículo 15 es una consecuencia de la supresión del 11.

Los hechos a, b y e del artículo 12 son muestras de una indeseable severidad, que contradice nuestra tradición legislativa.

VII

LA SEGUERIDAD EXTERIOR Y LA PAZ INTERIOR DE LA NACION NO QUEDARAN DESGUARNECIDAS

En lo que atañe a la defensa de los intereses relativos a lo que en términos amplios puede comprenderse como seguridad exterior y paz de la Nación, la legislación cuyo mantenimiento provisional propugno no deja al país totalmente desguarnecido.

En cuanto a la seguridad exterior, existen penas para la traición y la conspiración (Código Penal, artículos 214 a 218); penas que resguardan la paz y la dignidad de la Nación en el orden exterior (Código Penal, artículos 219 —sin la modificación de la ley 13.569 artículo 3º—, 220, 221 y 225 —los artículos 222 a 224 fueron derogados por la ley 13.985); penas aplicables al espionaje (ley 13.985, artículos 2º a 6º, 10 y 12, letras c y d). Estas penas constituyen una defensa suficiente para la seguridad exterior de la Nación, y, por lo tanto, no se puede decir que se cometa una torpeza al postergar su examen y posible reforma. Además, respecto de la seguridad exterior rigen las disposiciones del Código de Justicia Militar sobre traición (artículos 621 a 625), instigación a cometer actos hostiles (artículos 626 a 628), espionaje y revelación de secretos concernientes a la defensa nacional (artículos 629 a 637) y delitos que afectan las relaciones internacionales de la Nación (artículos 638 a 641).

En lo que respecta a la paz interior, la defensa represiva tampoco quedaría al descubierto. Hasta la sistematización de la defensa de los distintos intereses que el sabotaje abarca en los títulos delictivos adecuados (ver número V, 1), continuarán en vigencia los artículos 7º 10 y 12, letras c y d, de la ley 13.985. La delincuencia motivada en causas políticas está reprimida por las penas de la rebelión y sedición (Código Penal, artículos 226, 229, 230, 233, 234 y 235), reforzadas por las reglas del Código de Justicia Militar sobre rebelión (artículos 642 a 652) y delitos contra el régimen constitucional (artículos 653 a 655). Esos resguardos de la potencialidad interna de la Nación (sabotaje) y de su estabilidad constitucional encuentran su complemento en los delitos contra el orden público (Código Penal, artículos 209 a 213, modificados en lo que se refiere a la intimidación pública por la ley 15.276) y la seguridad pública. Esta comprende los capítulos del incendio y otros estragos (Código Penal, artículos 186 a 189), de los delitos contra la seguridad de los medios de transporte y comunicación (Código Penal, artículos 190 a 197) (11), de la piratería (Código Penal artículos 198 y 199) y de los delitos contra la salud pública (Código Penal, artículos 200 a 208, modificados por las leyes 11.309 y 11.331).

VIII

NUEVAS NORMAS DE URGENTE SANCION PARA REFORZAR EL RESGUARDO DE LA PAZ INTERIOR DE LA NACION

No me parece que en materia de seguridad exterior de la Nación exista la necesidad de dictar urgentemente nuevas reglas represivas. El estado de paz

(11) El Código Aeronáutico resguarda la navegación aérea (artículos 194 a 198).

internacional, la naturaleza y orientaciones del gobierno establecido y la falta de antecedentes demostrativos de la insuficiencia notoria del Código Penal y de la ley 13.985 fundamentan mi opinión.

Me parece, por el contrario, que las últimas experiencias del país exigen algún refuerzo represivo en lo que atañe al mantenimiento del orden interno de la Nación.

El título de los delitos contra el orden público se debe complementar con un capítulo V sobre «otros atentados contra el orden público», en el cual, en un mismo artículo (213 bis), se deben castigar con prisión de un mes a tres años:

- 1º A los que participaren en agrupaciones permanentes o eventuales que, sin estar comprendidas en el artículo 210, tengan por finalidad el ejercicio de violencias contra las personas o las cosas, por el solo hecho de su participación (12).
- 2º A los que públicamente instigaren a la discriminación o lucha racial, religiosa o de clases.
- 3º A los que, pública o privadamente, instigaren a los militares o a los componentes de las fuerzas de seguridad a desobedecer las leyes o violar los deberes de la disciplina militar u otros deberes inherentes a su estado (13).
- 4º A los que públicamente instigaren a la desobediencia colectiva de las constituciones, leyes, reglamentos, decretos o resoluciones de las autoridades públicas.

Los hechos sub. 1 a 3 vienen perturbando de manera notable la tranquilidad pública del país. El Estado constitucional debe poseer los medios legales para reprimirlos. El hecho del inciso 4º es igualmente dañoso para la paz pública.

A la par de esas normas de resguardo contra las actividades perturbadoras de la paz espiritual del pueblo, tan necesaria para una razonable vida social, es preciso incorporar normas represivas de los delitos contra la voluntad popular.

Los atentados contra la incolumidad de las elecciones de los representantes del pueblo no constituyen materia de las leyes especiales de elecciones nacionales, provinciales o municipales. Los atentados contra la voluntad popular, cuyo castigo propongo, estructuran una delincuencia de tipo común, porque no son simples contravenciones formales a las leyes electorales, sino ofensas a intereses primordiales de los gobernados, cuya existencia no depende de que esas leyes los reconozcan. Me parece que es urgente agregar al Código Penal un nuevo título, el número X bis, que prevea tales delitos. Esa urgencia aconseja incorporar íntegramente, sin modificaciones apresuradas, el título XIII, de la parte especial, del proyecto de 1960, pues a la vez que ya toma en consideración las reglas del Proyecto Peco, no ha sido objeto de observaciones en la encuesta realizada a su respecto (14). Para no perturbar el ordenamiento del código, conviene que el contenido de ese título se incorpore mediante el sistema del articulado repetido y numerado, comenzando con el artículo 2.361 y así sucesivamente. Sobre el título que propongo, véanse las exposiciones de motivos de los proyectos de 1960

(12) La fórmula es amplia y comprende tanto las agrupaciones «patoteras», como las «taquaras» y similares.

(13) Proyecto Peco, artículo 299.

(14) Ver Síntesis de observaciones formuladas y modificaciones propuestas en la encuesta realizada sobre el proyecto de Código Penal del Poder Ejecutivo, año 1960, Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1962.

(número 71) y de Peco (número 291 y siguientes) y las notas del primero.

IX

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE LOS FUNCIONARIOS O EMPLEADOS PÚBLICOS

La codicia y el ánimo de lucro son fuentes, en el país, de una profunda corrupción de la función pública. El Código Penal no carece de reglas que repriman delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos, motivados por la codicia y el lucro. Pero, desgraciadamente, por un lado, si los gobiernos —de quienes depende en gran medida el descubrimiento y persecución de esos delitos— han hecho algo frente a la situación imperante, ha sido para favorecer la impunidad. Por otro lado, el sistema represivo ha carecido de normas respecto de un importante aspecto de esa delincuencia, como es el que atañe al enriquecimiento ilícito de los funcionarios o empleados públicos.

La situación creada exige un remedio inmediato. Pero el remedio sólo será eficaz si el refuerzo del sistema punitivo se apoya en una rectificación de la conducta administrativa. Es preciso que a la utilización o aprovechamiento lucrativo de la función pública se lo comience a mirar y tratar como un delito grave, deshonrrante y perjudicial.

Como medida inmediata realizable al margen de una modificación apresurada de todo el sistema establecido por el Código Penal, propongo lo siguiente: por un lado, aumentar las penas del cohecho, de las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y de las exacciones ilegales previstas por el código; y, por otro lado, establecer castigos para los hechos que, no constituyendo esos delitos, son modos de enriquecimiento ilícito de los funcionarios o empleados públicos.

En cuanto al fortalecimiento de las penalidades establecidas por el Código Penal para el cohecho, las negociaciones incompatibles y las exacciones ilegales, me parece razonable lo siguiente: aumentar las penas del cohecho de esta manera: la del artículo 256, a reclusión o prisión de dos a seis años, conservando la medida de la inhabilitación absoluta; la del artículo 258, primera parte, a prisión de uno a cuatro años, ya que no concurre la violación activa de la función pública, y la pena de la segunda parte del mismo artículo, a reclusión o prisión de dos a seis años. Las penas de inhabilitación especial del párrafo segundo del artículo 258 se deben aumentar, en el *minimum*, respectivamente, a dos y tres años. Aumentar también las penas de las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (Código Penal, artículo 265), a reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta por tres a diez años. Y, finalmente, en las exacciones ilegales, elevar la pena del artículo 266 a prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de uno a cinco años; y en el artículo 267, aumentar la prisión hasta cuatro años y la inhabilitación hasta seis.

El enriquecimiento ilícito de los funcionarios o empleados públicos es algo en lo que el legislador penal debe intervenir sin demora. A partir del año 1936, el Congreso ha intentado muchas veces establecer penas para ese enriquecimiento. Concordantemente, las iniciativas han proyectado las reglas de tipo administrativo tendientes al control de la situación patrimonial de los funcionarios o empleados. Pero de éstas no me ocupo, pues su materia excede el ámbito de la consulta que me ha sido hecha. Me limitaré a señalar que las disposiciones de derecho penal común que propongo

son de distinto carácter que las disposiciones punitivas que pueden y deben sancionar determinadas contravenciones a esas reglas administrativas (verbi-gracia, la omisión de denuncia o declaración patrimonial) (15). Las reglas que propongo, así como las contenidas en los proyectos de Peco (artículos 323 y 324) y de 1960 (artículo 346), no persiguen asegurar la acción administrativa tendiente a la aplicación de las regulaciones legales de ese tipo, sino reprimir hechos que ofenden el interés que tiene la sociedad en que los funcionarios o empleados no corrompan la función pública. Conviene, también, que señale que tampoco me ocupo de la falsedad de la declaración de bienes hecha por los agentes de la administración, pues para que ella constituya un delito de falsedad documental (Código Penal, artículo 263) basta una regla administrativa que la exija en un instrumento público (16).

En esta materia me he atendido, una vez más, al criterio, justificado por la urgencia con que deben actuar el Poder Ejecutivo y el Congreso, de servirme, en la mayor medida posible, de los precedentes que me han parecido más meditados y que toman en cuenta lo que antes de ellos se ha hecho en el país.

Me ha parecido que para lograr, dentro de esa urgencia, una legislación represiva sobre el enriquecimiento ilícito, sin vacíos y defectos evidentes, la vía más segura era adoptar en lo fundamental el artículo 346 del proyecto de 1960. Este contempla y delimita con claridad mayor número de hechos punibles que otros precedentes. Sin embargo, no me parece admisible la pena única que establece para todos los casos. He creído conveniente, además, modificar en otros aspectos el texto del proyecto, y presentarlo dividido en varios artículos. He preferido la fórmula «funcionario o empleado público», contenida en otros proyectos, y no la de «funcionario público», del proyecto de 1960, para evitar que, a pesar del artículo 77, párrafo 4º, del Código Penal, se interprete que no comete el delito el que, siendo empleado público, no tiene a su cargo el ejercicio de una función pública.

Propongo, en definitiva, que como capítulo IX bis del título de los «Delitos contra la administración pública», del Código Penal se agreguen bajo el epígrafe de «Enriquecimiento ilícito de funcionarios o empleados», los siguientes artículos:

Artículo 268¹. — Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta por tres a diez años el funcionario o empleado público que, por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer la influencia derivada de su cargo ante otro funcionario o empleado público, a fin de que éste haga o deje de hacer algo relativo a sus funciones.

El que diere la dádiva o hiciere la promesa y la persona interpuesta para hacerla o recibirla, serán reprimidos con prisión de uno a tres años.

Artículo 268². — Será reprimido con la pena del artículo 268¹, párrafo 1º, el funcionario o empleado público que, con fines de lucro, utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo.

Artículo 268³. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años e inhabilitación absoluta

(15) Ver, por ejemplo, las sanciones del artículo 13 del proyecto, revisado por la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados (sesiones ordinarias, 1941, orden del día número 212, p. 2231).

(16) Proyecto de 1960, nota al artículo 346.

por uno a seis años el funcionario o empleado público que admitiere dádivas que le fueren presentadas u ofrecidas en consideración a su oficio.

El que presentare u ofreciere la dádiva será reprimido con prisión de un mes a un año.

Artículo 2684.—Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta por tres a diez años el que al ser debidamente requerido no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial suyo o de persona interpuesta para disimularlo, posterior a la asunción de un cargo o empleo público.

La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimida con prisión de uno a cuatro años.

El artículo 2681, párrafo 1º, reprime la venta de la influencia que por su calidad se supone tiene un funcionario o empleado sobre otro. He variado la fórmula del proyecto del 60 y he adoptado, en parte, la del artículo 256 del código (cohecho), porque el uso de fórmulas distintas podría inducir a pensar que, en lo que a ellas respecta, sus contenidos son diferentes. Lo que el cohecho del artículo 256 tiene diferente del delito a que me refiero no es lo relativo al modo como el autor recibe el beneficio, sino lo que atañe al objeto del pacto corruptivo: en aquél es el acto funcional; en éste, la influencia como funcionario o empleado para lograr una conducta funcional ajena. Me parece que las semejanzas de ambos hechos exigen penas iguales. El párrafo 2º del artículo 2681 reprime a los sujetos activos de la acción corruptora (proyecto Palacios, del 9 de agosto de 1961, artículo 3º). La pena menor se explica porque estos sujetos no violan la lealtad funcional o burocrática.

El artículo 2682 reprime otro modo de lucrar de los funcionarios o empleados públicos. El delito es grave porque, además de representar violaciones a la fe funcional o burocrática y de la reserva de la información o dato, el hecho puede tener malas consecuencias para la economía general. Se trata de un delito distinto al del artículo 157 del Código Penal. Este artículo castiga la simple violación del secreto relativo a actuaciones o procedimientos oficiales. Razones particulares aconsejan, como lo propongo más adelante, modificar la ubicación y el contenido del artículo 157.

El artículo 2683, párrafo 1º, reproduce, con el agregado de la referencia al «empleado», el tipo delictivo del artículo 259 del código. He aumentado la pena. En el párrafo 2º castigo al que presentare u ofreciere la dádiva. Debe derogarse el artículo 259.

El artículo 2684 se refiere al enriquecimiento patrimonial en sentido estricto. La experiencia del país es muy significativa al respecto. A partir de hace no pocos años el cambio de la situación patrimonial de los que han ocupado ciertas funciones o empleos públicos ha sido algo bastante común y evidente. He modificado la fórmula del proyecto de 1960 (artículo 346, letra d). He sustituido la fórmula «incremento considerable de su patrimonio», por la de «un enriquecimiento patrimonial suyo o de persona interpuesta para disimularlo». Aquella fórmula deja sin castigo el enriquecimiento efectivo ilícito que no es considerable; y no elimina en la medida conveniente las dificultades que respecto de la prueba de su existencia ofrece el caso de enriquecimiento disimulado mediante la actuación de un personero o por la asignación de los bienes a terceros. El hecho es grave y merece la pena que propongo.

El párrafo 2º castiga a la persona interpuesta, claro está, siempre que obre con dolo.

X

OTRAS NORMAS CUYA SANCION ES URGENTE

El debido y razonable control represivo de la incolumidad de las funciones públicas frente a las acciones ilícitas de sus agentes exige que el Congreso sancione, por lo menos, además de las que ya he propuesto, otras dos normas.

Una de ellas, formulada ya como agregado al artículo 261 del código por el decreto ley 4.778/63 (artículo 16), está destinada a sancionar como malversador al funcionario o empleado público que empleare en provecho propio o de tercero trabajos o servicios pagados por una administración pública. La fórmula, contenida también por el proyecto de 1960 (artículo 354), es correcta y castiga un hecho bastante frecuente, inmoral y dañoso para el patrimonio fiscal. El decreto ley 4.758 ubica la regla como párrafo segundo del artículo 261, cuya pena le aplica. Esto es correcto.

En segundo lugar, como una nueva y urgente contribución al mejor resguardo de la función pública, se debe sancionar una regla que reprima convenientemente la infidelidad de los funcionarios y empleados públicos respecto de la reserva a que los obliga el cargo. El artículo 157 del código castiga al «que divulgue actuaciones o procedimientos que por la ley deben quedar secretos». La disposición es poco amplia. No comprende claramente los hechos ni los documentos. Por otro lado, el delito es, inexplicablemente, de acción privada (Código de Procedimientos, artículo 73, inciso 3º) (17). Pienso que la función pública debe preservarse penalmente por una acción de oficio contra los funcionarios o empleados infidentes o indiscretos, no sólo respecto de las actuaciones funcionales sino, también, de los hechos o documentos cuyo secreto exige la ley. Me parece que se debe adoptar el artículo 339 del proyecto de 1960, salvo la pena. El artículo debe trasladarse al capítulo del «abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos», bajo el número 253 bis. Propongo la redacción siguiente:

Será reprimido con multa de quinientos a dos mil pesos e inhabilitación especial por seis meses a dos años el funcionario o empleado público que revelare hechos, actuaciones o documentos que por la ley deben quedar secretos.

La multa que propongo obedece a la necesidad de no romper por una disposición aislada el equilibrio del sistema que en materia de penas pecunarias tiene el código. Debe derogarse el artículo 157 del código.

XI

DECRETO LEY 4.778/63

El Poder Ejecutivo designó por el decreto 14.036, de fecha de 20 de diciembre de 1962, una Comisión Asesora en Materia Penal. Esta comisión aconsejó en febrero del corriente año una amplia modificación del Código Penal. El Poder Ejecutivo no la llevó a efecto, pero el 12 de junio próximo pasado dictó el decreto ley 4.778/63, que reformó diecinueve artículos del código.

(17) Ver la nota al artículo 339 del proyecto de 1960.

Se trata, en general, de reformas que no son imprescindibles o, por lo menos, urgentes. Algunas de ellas introducen reglas contrarias a lo que debe ser (por ejemplo: el párrafo 2º del artículo 29) (18) o de una oscuridad y complejidad tales que resulta fácil prever sus malas consecuencias (el agregado al artículo 40) (19). Otras sólo constituyen, en lo fundamental, consagraciones terminológicas de interpretaciones vigentes (reformas al artículo 58) o, como sucede respecto de casi todas las modificaciones restantes, se trata de reformas cuya consideración corresponde que se haga con más tiempo y estudio como aspectos de la actualización del Código Penal. Esto no se puede hacer en las próximas sesiones extraordinarias. He aprovechado, sin embargo, como se puede ver más arriba, alguna disposición del decreto ley 4.778. Como respecto de ella propongo una norma especial, pienso que el decreto debe derogarse en bloque.

XII

CONCLUSION

Al contestar la consulta del señor ministro lo he hecho restringiéndome a objetivos muy claros: eliminar el delito de opinión; reprimir hechos que, desde hace tiempo, vienen perturbando la tranquilidad pública; dotar al Estado de los medios represivos necesarios para fortalecer la incolumidad del ejercicio de la soberanía popular y, finalmente, aumentar las defensas contra las conductas de los agentes de la administración pública lesionadoras de ésta. Estos objetivos abandonan el sesgo autoritario de la legislación dictada a partir de 1945 en defensa del Estado. Este no se defiende restringiendo irrazonablemente la libertad de los gobernados, sino mediante reglas que depuren el ejercicio de esta libertad y el de la función pública.

Me he abstenido de proponer cualquier otra reforma de la legislación penal porque, como lo he señalado, su actualización no es algo urgente y representa una tarea que requiere tiempo, tranquilidad y estudio.

Saludo al señor ministro con mi consideración más distinguida.

DOCTOR RICARDO C. NÚÑEZ.
Director

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración en general.

(18) El párrafo 2º del artículo 29 propuesto, es una regla que olvida que la cuestión reside en el problema económico que la prisión o reclusión del culpable crea, por lo general, para su familia y para él mismo al readquirir la libertad. Para no perjudicar más esa situación, el perfeccionamiento de institutos y servicios penales debe tener otras fuentes de asistencia que las rentas de los presos.

(19) La regla del artículo 40, párrafo 2º, puede ofrecer muchísimas dificultades. La regla, que comienza por ser el injerto de una agravante de carácter general en el sistema de agravantes particulares del código, posee todos los peligros propios de las circunstancias establecidas como agravantes respecto de cualquier delito en el que concurren. CARRARA señaló hace mucho tiempo los peligros de establecer, sin distinciones, que siempre que concorra una determinada circunstancia, cualquier delito se agrava. Bien puede suceder que ciertos delitos supongan esa circunstancia como elemento constitutivo o presupuesto, y que en otros, con arreglo a sus respectivas naturalezas no resulte agravadora o carezca de significación (ver *Programa del curso de derecho criminal*, §§ 887, 1944, 2182 y 3059). Pero, tratándose del agravamiento por «representar el delito una manifestación de delincuencia organizada», a ese peligro general se añaden otros. Da una idea aproximada de ellos, el comentario —hecho sin esta finalidad— de FONTÁN BALESTRA, *Reforma del Código Penal*, Abeledo Perrot, p. 123 y sigs.

Tiene la palabra el señor diputado Cornejo Linares.

Sr. Cornejo Linares. — Constreñido por la hora, he de dar en forma harto breve las razones por las cuales he suscrito este despacho, y a la vez, exponer cuál es la conducta de nuestro bloque.

El proyecto deroga, por una parte, la legislación represiva, pero al mismo tiempo, con la sanción del Senado se vienen a crear nuevas normas represivas. No es nuestro propósito en este momento analizarlas, porque no hay tiempo; por ello exhorto a los señores legisladores a seguir mi ejemplo y a constreñir sus exposiciones para considerar este despacho en la forma más breve posible. Desde ya nuestro bloque se compromete a propugnar la reforma para adecuar esta legislación a una verdadera técnica penal.

Para concluir, formulo moción de orden de que a las 23 y 45 se cierre el debate y se vote el proyecto en consideración, con o sin lista de oradores.

Sr. Patlis. — Apoyo la indicación que acaba de formular el señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar la moción de orden, formulada por el señor diputado Cornejo Linares, de que a las 23 y 45 se cierre el debate para proceder a la votación del asunto en discusión.

—Resulta afirmativa de 76 votos; votan 109 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Belgrano Rawson.

Sr. Belgrano Rawson. — Señor presidente: es solamente para señalar que nuestro bloque, que en la oportunidad en que se consideró la derogación de leyes represivas señaló su punto de vista contrario a alguno de los artículos del proyecto del Poder Ejecutivo, en esta ocasión ha firmado con reservas el despacho sobre el proyecto venido en revisión del Honorable Senado.

Las reservas están referidas a dos disposiciones incorporadas por el Honorable Senado: una, se refiere al artículo 5º en cuanto agrega un texto al artículo 222 del Código Penal, que está derogado. Esto implica un error de técnica, y de todos maneras, con error o sin él, será una nueva norma penal; la otra, se relaciona con el artículo 9º, que incorpora al Código Penal el artículo 268º, en cuanto el mismo implica introducir el delito de sospecha. Sobre este particular, cabe señalar que en su momento el diputado Bilbao, de nuestro bloque, hizo una amplia e ilustrada exposición.

Me limito a señalar que esta norma, que consideramos peligrosa, no obstante ello no tendrá aplicabilidad hasta que no se haya creado por ley el registro de bienes de los funcionarios públicos.

De todos modos, no obstante estas reservas, nuestro bloque va a votar la sanción venida en revisión del Honorable Senado, por considerar

que aun con estos defectos que he señalado, la sanción que dará el Congreso será útil al país como una forma de contribuir a la pacificación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Reñé.

Sr. Reñé. — Señor presidente: en ocasión del debate sobre este tema el bloque de la democracia cristiana fijó claramente su posición. Señalamos algunas discrepancias con el despacho votado en el seno de esta Cámara porque consideramos que todavía quedaban subsistentes algunas disposiciones de corte represivo. Por consiguiente, no podemos estar de acuerdo con lo votado por el Honorable Senado, que restituye vigencia a artículos de un proyecto al que nos habíamos opuesto y que, incluso, lo amplía. Entendemos que en esta emergencia, y no disponiendo del tiempo suficiente para hacer el debate que se debe hacer, nos queda solamente el camino de aceptar ese despacho, a fin de que por lo menos se deroguen las disposiciones que en él figuran, aun cuando nos reservemos el derecho de pedir la derogación de otras en el próximo período de sesiones.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Muñiz.

Sr. Muñiz. — Señor presidente: deploro el momento y las condiciones en que se trata el despacho en consideración, relacionado con las enmiendas introducidas por la Cámara revisora a la sanción de la Honorable Cámara de Diputados sobre derogación de la llamada legislación represiva.

Cualquier reforma al Código Penal —que en esto consisten sustancialmente las modificaciones que trae la sanción del Honorable Senado—, por minúsculas o inocentes que aparezcan, deben ser objeto de serena reflexión y meditado estudio. No podemos ni debemos olvidar que el Código Penal tiene derecha, estrecha e íntima relación con las libertades. La experiencia nos ha dictado lección a todos, con enseñanzas perdurables, acerca de la prudencia e inteligencia con que hay que obrar en tan delicada materia. Lo ocurrido a *monsieur* Guillotine, el creador de la guillotina, es ejemplo válido para todo lo relativo a la legislación penal, por lo que es sensato y conveniente no olvidarlo.

Ante la circunstancia que me constriñe a un pronunciamiento en condiciones que no son las deseables ni las aconsejables, sólo diré contadas palabras. Algunas de las modificaciones introducidas por el Honorable Senado son, a mi entender, graves y trascendentes; y frente a este convencimiento, que es profundo y sentido, no admito nada que me prive de expresar mi pensamiento disidente y de moverme, dentro de las normas parlamentarias, para no aceptar lo que estimo —vuelvo a repetir— inconveniente, imprudente y peligroso.

Cumpliendo el compromiso contraído por todos los sectores en la Comisión de Labor Parlamentaria en el sentido de exponer las disiden-

cias muy sucintamente, concluyo sintetizando mi pensamiento en el sentido de que las enmiendas que trae el proyecto del Honorable Senado desnaturalizan los propósitos perseguidos por la Honorable Cámara de Diputados a la hora en que sancionó el proyecto derogando la denominada legislación represiva.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Sago.

Sr. Sago. — Llamo a la reflexión a los señores diputados: ningún cuerpo legislativo puede sancionar normas que modifiquen el Código Penal, empujado por el tiempo. Los tres señores que me precedieron en el uso de la palabra se han manifestado en contra de las reformas que ha introducido el Senado.

Sr. Cornejo Linares. — Exactamente.

Sr. Sago. — Existe un compromiso del Poder Ejecutivo y del partido oficialista en el sentido de que si ahora no se llegara a sancionar este asunto, él debe ser incluido en las sesiones extraordinarias.

No podemos legislar en estas condiciones, en contra de nuestra propia voluntad y de nuestra integridad de pensamiento. Estamos aquí en representación de un sector del pueblo que nos ha votado, y debemos coincidir con el pensamiento de ese sector.

No hubo un solo partido político que no se haya opuesto a la derogación de la legislación represiva. ¿Por qué no vamos a tener confianza en que el Poder Ejecutivo, si ahora no se aprueba este proyecto, no va a incluir este tema posteriormente en las sesiones extraordinarias?

Además, señores diputados, no podemos modificar el Código Penal que marca los límites de las garantías individuales y de las libertades individuales a través de este sistema.

Tenemos todavía una instancia. Cuando se trate el Estatuto de los Partidos Políticos será el momento, si se realiza un debate político, de saber cuáles son los partidos totalitarios y cuáles deberán o no concurrir al comicio. En esa oportunidad, si el Poder Ejecutivo no creyese conveniente su inclusión en extraordinarias, podremos incluir este asunto de las leyes represivas en un artículo transitorio. Este es un asunto que debió tratarse con autonomía.

Los decretos represivos eran nulos una vez constituido el régimen constitucional, y no se puede legislar con tanta facilidad sobre un aspecto tan fundamental de los derechos humanos. Yo veo con dolor que esta Cámara va a aceptar una serie de delitos. Aquí, algunas veces rompimos el quórum en defensa de un principio que creemos es el más honesto de acuerdo a nuestros sentimientos.

Llamo a la reflexión a todos los sectores, incluso el mayoritario, que no dudo puede hacer una profesión de fe en el sentido de que si ahora el Senado no trata este asunto, el Poder Ejecutivo podrá hacer que se trate.

Sr. Reñé. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Sago. — Sí, señor diputado.

Sr. Reñé. — Si el señor diputado tiene tanta confianza en la identificación del Poder Ejecutivo con la sanción de Diputados, yo le propongo que votemos esta sanción de Senadores y que hagamos llegar a aquél nuestros anhelos en el sentido de que envíe un proyecto de derogación de las modificaciones introducidas por el Senado, para ser tratado en las sesiones extraordinarias.

Sr. Sago. — El señor diputado sabe que eso es difícil, porque, precisamente, aquí el sector oficialista es el que sostiene algunos de esos aspectos. Y ha sido el Senado, con mayoría oficialista, el que ha mandado estas reformas.

Entiendo que el Poder Ejecutivo sabrá asumir su responsabilidad. Diría en este instante que no dudo que si este asunto no fuese tratado ahora, sería incluido en las sesiones extraordinarias, porque ha sido el caballito de batalla que más han utilizado los partidos políticos, sin excepción.

Sr. Pizarro. — ¿Quién se las dio?

Sr. Sago. — No hay una sola ley de las que se van a derogar que haya sido dictada en época de nuestro gobierno. Lo invito a que lea los decretos que se derogan.

Hoy saldrá el artículo 213 bis, de este proyecto que ustedes van a votar, que significará la opresión constante contra cualquier clase de gremio obrero o agrupación estudiantil, porque tiene una redacción que no tipifica. Y al decir esto, lo avalo con la mayoría de la Cámara, que derogó del proyecto del Poder Ejecutivo un inciso que venía en mejores condiciones que éste. Además, se insiste en la inversión de la prueba y en una serie de detalles que esta Cámara analizó a lo largo de un mes. Así mismo este proyecto ya estaba en la Cámara antes de las sesiones extraordinarias, enviado por el Poder Ejecutivo.

Debemos ser consecuentes con la discusión anterior y aceptar el proyecto nuestro, que rechaza todas estas reformas del Senado, e insistir en nuestra sanción primitiva. Serán responsables de estos los que lo voten, pero tengo la obligación de llamar a los señores diputados a la reflexión y de pedir que esa bancada exprese que así será. Debemos insistir en nuestra sanción, no por dos tercios, sino por simple mayoría. Ha habido asuntos que el Senado trató de inmediato. En otras ocasiones, problemas de gran importancia, como el artículo 28 en su oportunidad, recorrieron en un solo día los dos o tres pasos del Senado a la Cámara de Diputados.

Sr. Musitani. — Así no se hace ahora; eso era antes.

Sr. Sago. — Oportunamente, cuando se trate en particular, haré la respectiva moción y pido a los señores diputados que obren de acuerdo con su verdadera ideología, pues hay que dero-

gar las leyes represivas y no sustituirlas por otras.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Luco.

Sr. Luco. — Seré muy breve, de acuerdo con el compromiso contraído en la Comisión de Labor Parlamentaria.

Nuestro compañero Cornejo Linares ha señalado que nuestro bloque se expidió exhaustivamente sobre estos artículos que ha vuelto a introducir el Senado y tiene opinión formada sobre este asunto.

Los justicialistas resolvemos el problema con un claro sentido realista y político y con la convicción de que por un medio u otro la legislación represiva será derogada.

Por eso vamos a votar aparentemente contra nuestras convicciones, pero recordando que hay personas presas por infamantes decretos anteriores, lo que nos obliga a orientar nuestro voto en la forma explicada.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Gómez Machado.

Sr. Gómez Machado. — Nuestro bloque votará por la insistencia del anterior pronunciamiento de esta Cámara.

Creemos que estamos en presencia de una maniobra del oficialismo para imponer el proyecto originario del Poder Ejecutivo, que más que derogatorio de normas penales es instaurador de normas de ese tipo.

Reconocemos la buena fe de algunos sectores que creen en la honradez de este Poder Ejecutivo y que piensan que esto es una casualidad. Nosotros entendemos que se trata de una maniobra política del Poder Ejecutivo y del sector mayoritario para imponer el proyecto negatorio de la derogación de las leyes represivas.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Llaver.

Sr. Llaver. — Señor presidente: la premura del tiempo impide que se entre a considerar y analizar este tema en profundidad, porque nuestro sector tiene interés en que se sancione de inmediato el proyecto que deroga efectiva y definitivamente las normas represivas.

Sin embargo, no podemos permanecer en silencio ante los agravios gratuitos del sector del MIR, que no hace nada más que reiterar, a falta de razones, una táctica política de permanente obstrucción, que persigue otros fines que no son los del interés nacional.

Sr. Gómez Machado. — Es inexacto, señor diputado.

Sr. Llaver. — Quiero destacar que no es exacto que mediante la sanción del Senado se instauran nuevas formas represivas y que en modo alguno esta sanción vuelve al primitivo proyecto del Poder Ejecutivo. Basta con señalar que la sanción del Senado —que no podemos ahora entrar a examinar y analizar en forma exhaus-

tiva— importa una mejora de la sanción anterior e, incluso, del proyecto del Poder Ejecutivo.

Sr. Pérez Gallart. — Es más represiva.

Sr. Llaver. — En cuanto al artículo 213 bis, en su inciso 1º), incrimina a aquellos que se asocian para por medio de la fuerza o el temor tratar de imponer sus ideas o impedir el ejercicio de las ideas por parte de terceros.

El resto de las reformas supone, en lo esencial, incorporar el artículo 268², artículo 9º del despacho del Senado, que no instaura el delito de sospecha, como aquí se ha manifestado, sino que introduce una nueva norma para perseguir y castigar el enriquecimiento ilícito de funcionarios, que ha constituido un verdadero flagelo para la sociedad argentina.

De modo que respetando el compromiso adquirido por todos los bloques de ser breves, nuestro sector acepta la sanción del Senado, porque ello importa mejorar la ley y porque, al mismo tiempo, facilita la sanción definitiva de la derogación de la llamada legislación represiva (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Christe.

Sr. Christe. — Señor presidente: nuestro bloque ha meditado detenidamente acerca de la forma en que se trata el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, relacionado con la derogación de las leyes represivas.

Considera que éste es un asunto que merece particular seriedad. Se trata nada menos que de reformas al Código Penal, y por mucho menos, cuando se ha tratado de innovar con algunos de los otros códigos que no tienen la significación del Código Penal, se han oído en esta Cámara voces censurando los procedimientos como el que en este momento estamos poniendo en práctica.

Para nosotros, especialmente para el que habla es absurdo votar un proyecto de esta manera. Confieso que no conozco el proyecto tal como ha venido modificado por el Honorable Senado. ¿Cómo puede darse, entonces, un voto en estas condiciones? Llamo la atención sobre esto a los señores diputados. Yo, que por primera vez invisto un mandato ante esta Honorable Cámara, pienso que debemos aparecer ante la opinión pública como personas absolutamente responsables de nuestros actos. ¿Y qué responsabilidad habría en mi si yo votara ahora este proyecto que no conozco?

Sr. Pedrini. — Y que mucho daño ha causado a la República.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sírvanse los señores diputados no interrumpir al orador.

Sr. Christe. — En la misma situación están todos los señores diputados. Por consiguiente, nosotros vamos a votar el despacho de minoría, que dispone que el proyecto sea remitido al Ar-

chivo. Entendemos que si la Cámara considera necesario tratarlo, en las sesiones extraordinarias habrá oportunidad de hacerlo. Pensamos que con esta responsabilidad cumplimos con nuestro deber acabadamente y que el país reconocerá el acierto de nuestro temperamento.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Rozas.

Sr. Rozas. — Señor presidente: debo hablar en condiciones, desde luego, muy precarias,...

Sr. Presidente (Mor Roig). — Quedan dos minutos y hay dos oradores anotados.

Sr. Rozas. — ...pero esto no impide que señale rápidamente las razones principales de nuestra actitud.

Estamos frente a situaciones premiosas, no solamente en razón de la hora de esta sesión, sino también de las circunstancias generales que está viviendo el país, a punto tal de que no creo factible la posibilidad de que este asunto vuelva a ser tratado en el curso de las sesiones de este año. Nace en nosotros, entonces, la necesidad de asegurar cuando menos la derogación de una parte principal de las llamadas leyes represivas. Este es un concepto positivo, sustantivo, que nos decide a votar en este momento por la sanción del Honorable Senado sobre la materia, sanción que no nos complace de una manera total y absoluta, pero que, sin ninguna duda, asegura la realización de ese nuestro propósito principal, que consiste, en grado sustantivo, en la derogación de las leyes represivas tan comentadas y tantas veces objeto de nuestros comentarios y nuestra oposición.

Dejamos constancia de que mantenemos nuestras observaciones y manifestamos nuestra decisión de volver sobre el tema en la primera ocasión oportuna que se presente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Muniagurria.

Sr. Muniagurria. — Naturalmente, la sanción del Senado no nos complace, pero, de cualquier manera, entendemos que no adoptando la Cámara de Diputados en esta oportunidad la aceptación de esa sanción, las leyes represivas quedarían en vigor. Estaríamos condicionados a un evento, el de que se incluyese o no el tema en las sesiones extraordinarias, eventos que nosotros no decidimos.

Sr. Sago. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Presidente (Mor Roig). — Son las 23 y 45, por lo que el término fijado por la Honorable Cámara expira en este momento. Por lo tanto, la Presidencia invita al señor diputado Muniagurria a no aceptar interrupciones y a concretar su pensamiento.

Sr. Muniagurria. — En esas condiciones, para concretarnos en la realidad, no de una solución perfecta, como es aquella a que todos aspiramos, sino de una solución posible, que es la que está a nuestro alcance, nuestro grupo va a votar por

la derogación de las leyes represivas, aceptando la sanción del Senado, pero con todas las reservas a que nos determinan muchas normas que son observables desde el punto de vista jurídico, político y penal, para contribuir en su hora a una reforma fundamental. Afirmamos en este momento una importante consecuencia: con nuestra actitud derogamos las leyes represivas en la medida en que ello está al alcance de nuestras posibilidades parlamentarias.

Sr. Colello. — Pido la palabra para una simple aclaración.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Honorable Cámara resolvió que a las 23 y 45 se votase este tema, y ya nos hemos excedido en dos minutos.

Varios señores diputados. — Que se vote.

Sr. Colello. — El diputado que habla votará por la afirmativa el proyecto en revisión del Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el despacho de mayoría, que aconseja la aceptación de las modificaciones introducidas por el Honorable Senado.

— Resulta afirmativa de 87 votos; votan 119 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley (1).

66

MOCIÓN

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar la moción de sobre tablas formulada por el señor diputado Balestra, para que se considere el proyecto venido en revisión del Honorable Senado, con modificaciones, sobre construcción de un edificio para el Colegio Nacional de Curuzú Cuatía, Corrientes.

— Resulta afirmativa de 82 votos; votan 118 señores diputados.

67

COLEGIO NACIONAL MANUEL BELGRANO

(Curuzú Cuatía, Corrientes)

Buenos Aires, 30 de octubre de 1964.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en su sesión de la fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión, relativo a la construcción y habilitación de un edificio destinado al Colegio Nacional Manuel Belgrano, de la ciudad de Curuzú Cuatía, provincia de Corrientes,

(1) Véase el texto de la sanción en el Apéndice.

y ha tenido a bien aprobarlo sustituyendo el artículo 3º por el siguiente:

Artículo 3º — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, se atenderán con el producido de la negociación de títulos de la deuda pública, quedando facultado el Poder Ejecutivo para realizar la emisión correspondiente.

Dios guarde al señor presidente.

CARLOS H. PERETTE.
Claudio A. Maffei.

ANTECEDENTE

(Orden del día número 247)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Autorízase al Poder Ejecutivo a invertir hasta la suma de treinta millones de pesos (\$ 30.000.000) con destino a la construcción y habilitación de un edificio para el Colegio Nacional Manuel Belgrano, en la ciudad de Curuzú Cuatía, provincia de Corrientes.

Art. 2º — Facúltase al Poder Ejecutivo para aceptar del gobierno provincial o communal la donación del terreno necesario para tal finalidad.

Art. 3º — El gasto que demande el cumplimiento de la presente ley se imputará al Fondo de Obras y Servicios Públicos, ley 14.578.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración.

Se va a votar si se aceptan las modificaciones introducidas por el Honorable Senado.

— Resulta afirmativa de 85 votos; votan 115 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley (1).

68

DONACION

(Orden del día número 415)

Dictamen de comisión (2)

Honorable Cámara:

La Comisión de Legislación General ha considerado las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley que le fue pasado en revisión sobre donación al Centro Atlético y Recreativo Almirante Brown, de San

(1) Véase el texto de la sanción en el Apéndice.

(2) Artículo 90 del reglamento de la Honorable Cámara.